

DENUNCIA Y SALIDA DE VENEZUELA

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS



CIDH

septiembre 2013

**Denuncia y salida de Venezuela de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)**

Nicolás Maduro Moros y Hugo Chávez Frías

DIRECTORIO

Delcy Rodríguez

Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información

Felipe Saldivia

Viceministro de Gestión Comunicacional

Mercedes Chacín

Viceministra de Estrategia Comunicacional

Odry Farnetano

Directora General de Prensa y Análisis de Contenido

Ramón Medero

Director de Publicaciones

Edición y corrección: **Ricardo Romero, Francisco Ávila**

Diseño y montaje: **Saira Arias**

Diseño de portada: **Luis Manuel Alfonso**

Depósito legal: **lf126920133203357**

ISBN: **978-980-7560-59-7**

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela en la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
Septiembre, 2013

Denuncia y salida de *Venezuela* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Nicolás Maduro Moros
Hugo Chávez Frías

Presentación

El Gobierno Bolivariano, además de varios otros Jefes de Estado progresistas de Nuestramérica, ha denunciado en múltiples ocasiones y en los escenarios más diversos la instrumentación de algunos organismos internacionales por parte de Estados Unidos y su política injerencista en América Latina, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este folleto ofrece algunas palabras y escritos del Comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro que expresan el pensamiento insurrecto de los hombres que hoy luchan por una verdadera independencia de los pueblos del Sur.

La lectura de estos escritos nos ayuda a comprender los mecanismos de intervención y de dominación de Estados Unidos, que tiene además el descaro de no formar parte del Sistema de Derechos Humanos ni reconocer su jurisdicción.

Este documento, material para el debate, reúne cartas y declaraciones que sirven también para entender la decisión valiente del pueblo venezolano de abandonar la CIDH.

Como bien nos lo recuerda el presidente Maduro, “en el año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el único organismo multilateral que reconoció a Pedro Carmona Estanga como gobierno en Venezuela”.

Luego de una larga lista de atropellos, fechorías y perversiones políticas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela renunció a este organismo el día 6 de septiembre de 2012, renuncia que se hizo efectiva un año después, el 9 de septiembre de 2013.

Palabras del Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros,
sobre la renuncia del país a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Presidente Nicolás Maduro: En relación con el tema de la CIDH, movieron (la oposición) a los dinosaurios que están por allí, varios de ellos procesados por hechos de corrupción, ex gobernadores. Movieron a sus dinosaurios para que salieran a decir que por qué nos salimos de la CIDH. Toda Venezuela sabe por qué.

Ellos mueven sus voceros, pero yo dije esta información y ellos saben que es exactamente así: a finales de julio, en la Casa Blanca, hubo una reunión especial para evaluar la situación en Venezuela. La caracterización fue la siguiente: “El régimen se consolida. No pudimos deslegitimar el Gobierno revolucionario surgido de la victoria del 14 de abril. Comienzan a ocupar espacios... y a desarrollar el proyecto con buena participación del pueblo”. No se está dando el escenario que ellos habían previsto; una vez que perdiéramos al Comandante Chávez, venía el caos.

Es bueno que le recordemos a toda Venezuela que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue una iniciativa positiva, para crear un sistema que protegiera los derechos humanos en todo el continente, y Venezuela es uno de los primeros países que se adhirió a este sistema, al Convenio de San José. Los Estados Unidos no forma parte del Sistema de Derechos Humanos, no lo reconoce, no reconoce su jurisdicción.

Este es un punto importante a analizar: los EEUU no reconoce la jurisdicción ni de la Corte, ni de la Comisión. Pero son unos vivos, la sede de la Comisión queda en Washington DC; y toda la burocracia internacional que se ha formado en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de Washington sobre todo.

Casi todos los participantes y la burocracia que forma parte de la CIDH están capturados por los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una realidad que hay que decirlo cruda, no podemos edulcorarla y el Sistema llamado de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en la Comisión fueron derivando en un instrumento de persecución contra los gobiernos progresistas que se iniciaron con la llegada del

presidente Chávez, en el año 99. Lamentablemente, no podría ser de otra manera porque la OEA, como tal, en sus primeros 60 años y todo el Sistema Interamericano funcionó como sistema panamericanista, concebido así para garantizar la influencia y la hegemonía de los Estados Unidos sobre toda América Latina y el Caribe.

La OEA es otra historia, aunque forma parte del mismo Sistema. Los convenios que crean el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se crean en el marco de la negociación de la OEA, son aprobados en el marco de la OEA, Estados Unidos no lo reconoce, es lo primero y derivaron en sistemas de persecución, hasta llegar al extremo de que, en el año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el único organismo multilateral que reconoció a Pedro Carmona Estanga como gobierno en Venezuela. Ya eso es suficiente como para que renunciaran todos y todas.

Pudiéramos hablar no sé cuántas historias, cien historias sobre la CIDH, la Comisión y la Corte que lamentablemente degeneradas. Ellos se creen un poder supranacional, ellos se creen que son un poder por encima de gobiernos legítimos en el continente.

Yo fui canciller del comandante Chávez, durante seis años y medio, y participé en bastantes reuniones, proponiendo a nombre del comandante Chávez que se reformara la Corte y se reformara la Comisión y nos estrella- mos contra un muro.

La última reunión que yo fui de la OEA fue en Cochabamba (Bolivia) en el año 2012, y eso fue un debate. No fue público el debate, pero fue candela. Duró siete horas y sólo el gobierno de los Estados Unidos se opuso a un cambio en la CIDH. Nosotros proponíamos que hubiera una reforma que se adecuara a los nuevos tiempos, que se acabara con la impunidad de los miembros de la Comisión y la Corte que se creían que estaban por encima de los gobiernos y de los países; que se investigar- ran los casos de abuso contra Venezuela, en el caso del golpe de Estado, en el caso de estos terroristas, y Estados Unidos se opuso en Cochabamba.

Era Roberta Jacobson, creo que todavía es subsecre- taria de Estado, y estaba participando en ese debate. Lo recuerdo porque fue un toma y dame, extenso, con argu- mentos. Ellos con sus argumentos imperiales y nosotros con nuestros argumentos antiimperiales. Imperio y con-

traimperio. Y se conformó una comisión. A mí me tocó presidir la OEA en ese momento.

Propusimos una comisión y se creó una comisión. ¿Cuál es el resultado de la comisión después de más de un año y pico? No se ha avanzado en nada; por el con- trario, la CIDH acaba de recibir al doctor Alan Brewer Carías -que es el redactor del decreto de Pedro Carmo- na Estanga- lo acaba de recibir como héroe. ¿Ustedes creen que uno puede aguantar tantos abusos? No. Hay que reaccionar, tenemos dignidad, a Venezuela nadie la mancilla, y nosotros mientras estemos aquí, no dejare- mos que nadie mancille a Venezuela, que nadie se meta con Venezuela.

Ya basta, se le acabó el tiempo a la CIDH, y es la mejor decisión que nuestro Comandante pudo haber tomado. Ahora ellos pretenden desconocer el sistema electoral venezolano.

Hoy Ramón José Medina, copeyano de toda la vida, fue hoy a la sede de la CIDH a meter un documento diciendo que en Venezuela existe un sistema electoral fraudulento, que hubo fraude el 14 de abril. Acaban de meter el documento.

Yo les digo, ¿qué tiene que ver la CIDH con el funcionamiento soberano y autónomo del quinto poder de nuestro país, el Poder Electoral? Ah, que ellos aspiran que la CIDH saque una decisión, no sé cuándo, y diga que yo no soy Presidente de la República. ¿Para qué? Para justificar una invasión será, que se imaginan ellos.

Uno podría pensar que son unos estúpidos, pero no lo hacen por estúpidos, lo hacen por perversos, o pudieran ser estúpidos y perversos, a la vez. Entonces, es hasta contradictorio: estar inscribiendo candidaturas y en el mundo meten un documento diciendo que aquí se hace fraude.

A la CIDH se le pasó su tiempo. Venezuela casi en el mismo tiempo en que metimos el documento, un documento extraordinario realmente, bien sustentado, tardamos como seis meses trabajándolo con expertos en la materia, con asesoría internacional, evaluando con objetividad la decisión que le íbamos a recomendar al presidente Chávez, y ese documento lo contiene todo pues. El documento que llevamos al seno de la OEA, como dice sus estatutos, para denunciar la CIDH, contiene la verdad de Venezuela y casi inmediatamente a los días

posteriores fuimos electos -como República Bolivariana de Venezuela- para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Tres años vamos a estar ahí. Dentro de poco vamos a presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y dijimos, bueno, el Consejo de Derechos Humanos vamos a fortalecerlo, en Unasur, estamos proponiendo crear un Consejo de Derechos Humanos; en Celac, también, para que en Suramérica, Latinoamérica tengamos un Consejo de Derechos Humanos nuestro, no de los gringos, no en Washington, no con una burocracia internacional que nos odia, que nos desprecian y que recibe órdenes del imperio.

Así que es una decisión acertada, justa y, además, que defiende a nuestra patria de cualquier intento por mancillarnos.

Palabras del Comandante Supremo

Hugo Chávez Frías

explicando las razones de salida
de Venezuela de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Presidente Hugo Chávez: Ya nosotros hicimos la denuncia sobre la CIDH, al respecto no tengo más comentarios que los que ya he hecho. Ojalá algún día nosotros tengamos, de verdad, una Comisión seria, junto con los gobiernos y los pueblos, podamos luchar por los derechos humanos.

Aquí nosotros luchamos, pero a brazo partido, por los derechos humanos de nuestro pueblo. La CIDH, lo último que hicieron fue el tema este de un terrorista venezolano, que es prófugo de la justicia, Díaz Peña, quien puso unas bombas aquí -y está demostrado-, al Consulado de Colombia y de España.

Él puso las bombas, lo capturamos y estaba preso. Cumplió la mitad de la pena, y se hizo merecedor de un beneficio procesal, un juez se lo autorizó, cuestión de los poderes y los derechos que están aquí, pues. Entonces, él en vez de presentarse regularmente, como tenía que

hacerlo, se fugó y está en Estados Unidos. Ahora está denunciando al Gobierno venezolano, él que es un terrorista, de que aquí no se le respetaron sus derechos, que no sé qué más.

Entonces, la CIDH, pero sin consultar ni siquiera con nosotros, emitió un... ¿qué fue, Nicolás?

Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro: La Comisión, sin consultar al Estado venezolano, inmediatamente pasó el caso a la Corte Interamericana, y la Corte unos meses atrás dictaminó que tenemos que pagarle una indemnización de varios miles de dólares y, además, proteger los supuestos derechos vulnerados a este terrorista, que efectivamente estaba en juicio, había sido condenado junto a otro grupo de personas que estuvieron en la Plaza Altamira, e hicieron este ataque con bombas a estas dos representaciones diplomáticas.

Presidente Hugo Chávez: Tenemos bastantes argumentos, volviendo otra vez al discurso, o a la ética del discurso. Argumentos para justificar nuestra actuación, nuestros principios éticos y nuestra conducta moral. Allá ellos con sus actitudes.

Poliedro de Caracas, 7 de septiembre de 2012

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez: Veán ustedes cómo son los órganos del imperio y cómo actúan contra Venezuela, la inefable CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la hemos denunciado. Nosotros nos tenemos que salir definitivamente de esos organismos, que son organismos del imperialismo, son organismos imperiales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué fue lo que dijo, Nicolás? Oigamos al canciller y compañero Nicolás, para que veamos hasta dónde llega el descaro de estos organismos del imperio.

Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro: Una secretaria de la Comisión llamó a nuestra Embajada y la atendió la embajadora alterna, Carmen Velásquez, y le dijo de un comunicado que ellos querían sacar sobre una masacre que ha habido en Venezuela.

La secretaria nuestra le respondió, la embajadora, que no, que eso no había sucedido, que esperara para

tener una conversación. Colgó el teléfono y ya estaba publicado el comunicado, donde calificaban de supuesta masacre ante los pueblos indígenas.

Así que ellos siguen actuando, violando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. No dan tiempo para investigar, califican de manera previa, se suman a las campañas internacionales contra el país. Ellos son los máximos violadores de la propia Convención Interamericana y todos los mecanismos que hay para verificar cualquier denuncia sería que haya sobre el problema de derechos humanos.

Presidente Hugo Chávez: Ahora comparemos esto de la siguiente manera: esa comisión, infame comisión, sin tener ninguna prueba ya está exigiéndole al Gobierno que investigue la masacre, ya la dan por un hecho, sin una prueba. Pero dime tú, Nicolás, esa comisión se ha pronunciado de alguna manera en torno, por ejemplo, a la masacre de Puente Llaguno.

Canciller Nicolás Maduro: No, jamás. Al contrario, Presidente, cuando usted estaba secuestrado, el único organismo internacional que reconoció la dictadura breve de Pedro Carmona Estanca fue el secretario eje-

cutivo de la comisión, Santiago Cantón, quien envió una comunicación oficial reconociendo la existencia de ese gobierno y desconociendo la investidura de usted como Presidente.

Presidente Hugo Chávez: Estos elementos que hemos comentado acá forman parte de eso que yo venía mencionando: lo que está en juego el 7 de octubre.*

* Hace alusión a las elecciones presidenciales que se celebraron en Venezuela el 7 de octubre de 2012, en las que resultó reelecto aventajadamente el presidente Hugo Chávez, contra su contrincante Henrique Capriles Radonski, de derecha y de filiación política con el imperialismo.

Carta de la República Bolivariana
de Venezuela a la Organización
de los Estados Americanos (OEA)
oficializando la salida del país de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

*Excelentísimo Señor
José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos Washington, D.C.*

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de hacer referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por la entonces República de Venezuela; así como hacer referencia a los dos Órganos regidos por ella: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas competencias reconoció la entonces República de Venezuela, el 9 de agosto de 1977 y el 24 de junio de 1981, de conformidad con los artículos 45 y

62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

En su momento, para los países de nuestra región fue muy importante ratificar la Convención Americana de los Derechos Humanos e institucionalizar mecanismos que servirán al establecimiento de un marco de promoción y protección de los derechos humanos en la región. Nuestro país fue uno de los primeros en ratificar el Pacto de San José, siendo además el único que lo hizo mediante declaración unilateral, y fue el segundo en aceptar la jurisdicción de la Corte.

Posteriormente, la República Bolivariana de Venezuela, desde la promulgación de nuestra Carta Magna en el año 1999, consagró de manera aún más amplia los derechos humanos y las libertades y garantías fundamentales de las que gozan todas las personas que habitan en este país, reconociendo y consagrando jurídicamente, además, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos ambientales, así como los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, estableciéndose mediante nuestro texto constitucional, instituciones novedosas dentro de la estructura del Estado, dedicadas a la

protección de los derechos y a velar por el cumplimiento y respeto irrestricto a los mismos.

De esta manera, el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra a la vanguardia de los sistemas garantistas de la región, estableciendo nuevas instituciones que tienen como propósito velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como también con el establecimiento de dos nuevas ramas del Poder Público: el Poder Electoral y el Poder Ciudadano.

Desde la autoridad moral y política que esta circunstancia le otorga a la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos, es coherente denunciar que en los últimos años la práctica de los órganos regidos por el Pacto de San José, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han alejado de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos, y especialmente al de nuestro país, adoptando una línea de acción inje-

rencista en los asuntos internos de nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales ampliamente consagrados en el derecho internacional, como lo son el principio del respeto a la soberanía de los Estados y el principio de autodeterminación de los pueblos, llegando incluso a desconocer el propio contenido y disposiciones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, sobre todo, en aspectos referidos a los presupuestos que, de acuerdo a la Convención, harían procedente la actuación de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es el necesario agotamiento de los recursos internos del Estado parte de la Convención, lo cual supone un desconocimiento al orden institucional y jurídico interno de cada uno de los Estados que forman parte de dicho tratado internacional, y, por ende también, otro irrespeto a la soberanía de los mismos; denotando todo ello una importante regresión al llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se hace impostergable subsanar.

De nada han servido los esfuerzos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos por promover la necesaria reforma y modificación

de ambas instituciones, en virtud de que se encuentran secuestradas por un pequeño grupo de burócratas desaprensivos que han bloqueado, obstaculizado e impedido que se hagan las transformaciones necesarias.

Por comparación, es mucho lo que se ha avanzado en el ámbito del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el cual se ha fortalecido con la conformación del Consejo de Derechos Humanos y con la estructuración de una herramienta valiosa dentro del Sistema Universal como lo es el mecanismo del Examen Periódico Universal, el cual ha servido para debatir y analizar la situación de los derechos humanos en todos los países, sobre la base del diálogo constructivo en condiciones de igualdad, compatibilidad, respeto y justicia.

La República Bolivariana de Venezuela se mantiene comprometida en profundizar la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, así como con los Comités que examinan los informes de las distintas Convenciones ratificadas por Venezuela, esperando que este Sistema se consolide como un ámbito eficiente y objetivo, para impulsar una verdadera promoción y protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.

Por ello nuestro país considera muy lamentable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no siga el ejemplo del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en cuanto al necesario proceso de revisión y reforma que requieren los órganos competentes para la aplicación y observancia de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es particularmente lamentable que un Sistema que fue creado para fortalecer la solidaridad americana en todo lo inherente al respeto y la garantía de los derechos fundamentales, tal y como fue establecido en la Carta de la Organización de Estados Americanos, hoy día viola y transgrede con su mala práctica los principios del Pacto de San José y menoscaba, incluso, los derechos y obligaciones que sus Estados Parte han adquirido en el marco de la Carta de Naciones Unidas.

La República Bolivariana de Venezuela considera pertinente recordar que el principio de la universalidad de los derechos humanos, reflejado en el artículo 131 de la Carta de la OEA, nos llama a garantizar que el Sistema Interamericano no menoscabe los derechos y obligaciones que hemos adquirido en el marco del Sistema Universal de la ONU y, por ello, es necesario reaccionar.

Venezuela no puede guardar silencio ante lo que en la actualidad se ha constituido como un ejercicio de violación flagrante y sistemática del Pacto de San José por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como se evidencia en los casos que detalladamente exponemos en el anexo de la presente nota.

La Corte Interamericana no puede pretender excluir, desconocer, ni sustituir el ordenamiento constitucional de los Estados Parte, pues la protección internacional que de ella se deriva es coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Sin embargo, reiteradas decisiones de la Comisión y de la Corte han golpeado los preceptos y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo ha manifestado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro Estado, mediante su Decisión 1572 de 2008.

La Comisión, por su parte, que de acuerdo a la Carta de la OEA tiene facultades para promover la observancia y defensa de los derechos humanos y, por vía de la Convención, competencia para “conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos

contraídos por los Estados Parte” (artículo 33), no tiene potestad alguna para pretender “aplicar la Convención”, ni “declarar” ni “decidir” sobre la responsabilidad de un Estado, ni sobre las consecuencias jurídicas, tal y como ha pretendido hacer los hechos que conciernen a Venezuela, transgrediendo claramente sus propios mandatos y funciones.

Es inaceptable que un país como Venezuela, que ha dado un salto histórico para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que eran sistemáticas antes de 1999, sea emplazado y difamado por razones de carácter político, a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores políticos vinculados a actos contrarios a las leyes y a la Constitución, los cuales reciben atención inmediata y son admitidos por la Comisión y por la Corte, aun cuando, en todos los casos vinculados a Venezuela, han reconocido que no se habían agotado los recursos de jurisdicción internos y, en algunos casos, ni siquiera se habían interpuesto ante ellos, violando así el artículo 46.1 de la Convención.

Esta celeridad con la que atienden esos casos claramente politizados y parcializados contra el Estado venezolano y su democracia, violando la Convención, han obligado a nuestro país a preguntar, tanto a la Comisión como a la Corte:

- ¿Cuáles fueron las razones que retrasaron por más de seis años, la consideración de la más grave, masiva y brutal violación de los derechos humanos en Venezuela, derivada de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida internacionalmente como “El Caracazo”, donde fueron asesinados cientos de venezolanos?
- ¿Por qué la Comisión Interamericana no emitió comunicados o resoluciones sobre las masacres de Cantaura de 1982, ni de Yumare de 1986, a pesar de su extrema gravedad, y no manifestó preocupación por estos gravísimos hechos de sangre, pero en cambio sí se ha manifestado sistemáticamente, a partir de 1999, por circunstancias que no revisten características de urgencia como proyectos de leyes de cooperación o de información en Venezuela?

- ¿Por qué a esta fecha nuestro país no ha recibido explicación sobre el reconocimiento de hecho que hizo el entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, a las autoridades de facto que se instalaron en Venezuela a consecuencia del golpe de Estado del 11 de abril de 2002?
- ¿Por qué, aun reconociendo que se había instalado un Gobierno de facto y que corría peligro la vida del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se encontraba secuestrado, la Comisión no admitió y no procesó la solicitud de medidas cautelares a favor de nuestro Presidente, presentada por la Asociación MINGA?

Estas preguntas y muchas otras, aún sin respuestas, contrastan con el hecho de que son ya demasiados los casos conocidos contra la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se evidencia las extralimitaciones de la Comisión y de la Corte y su actuación violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre los cuales podríamos señalar los siguientes:

Los casos de los periodistas *Ríos, Perozo y otros contra Venezuela*, cuyas demandas fueron admitidas por la Comisión sin que las partes hubieran agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y posteriormente elevadas a la Corte, y que aun cuando la Corte reconoció que no era cierta la alegada violación a los derechos a la libertad de expresión, propiedad e igualdad ante la ley, acusó al Estado venezolano de no garantizar que los particulares no impidieran el ejercicio de la libertad de expresión.

Este comportamiento irregular de la Comisión y de la Corte, injustificadamente favorable a Ríos y Perozo -quienes para la fecha de los hechos alegados desempeñaban una actividad política pública de gran beligerancia en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez, amparándose en su condición de periodistas-, produjo de hecho, desde la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la campaña internacional desprestigio contra la República Bolivariana de Venezuela, acusándole de restringir la libertad de expresión. Detalles adicionales sobre estos casos son incluidos en la nota anexa.

Algo semejante ocurrió con el caso de *Allan Brewer Carías contra Venezuela*, el cual fue admitido por la Comisión sin que el denunciante hubiera agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e instalando al Estado venezolano a “adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial”, a pesar de que el juicio penal que se le sigue, por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución no ha podido celebrarse, toda vez que el imputado se encuentra prófugo de la justicia y la legislación procesal penal venezolana impide juzgarle en ausencia.

Este comportamiento irregular de la Comisión, injustificadamente favorable a Brewer Carías -quien participó en la autoría del texto del decreto de destitución de los Poderes Públicos, que fuera proclamado por las autoridades de facto que asaltaron el poder tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en Venezuela-, produjo de hecho, desde la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la campaña internacional de desprestigio contra la República Bolivariana de Venezuela, acusándole de persecución política. Detalles adicionales sobre estos casos son incluidos en la nota anexa.

Otro vergonzoso ejemplo es el caso de *Leopoldo López contra Venezuela*, el cual fue admitido por la Comisión, no solo sin que el denunciante hubiera agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que a pesar de que el denunciante habría renunciado expresamente a ello, al no impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la resolución administrativa que le inhabilitó para ejercer cargos públicos por corrupción. En este caso la Corte dictó una sentencia que resultaba inaplicable, al pretender ordenar al Estado venezolano la modificación de su ordenamiento jurídico interno, surtido del cumplimiento de obligaciones internacionales, incluso del ámbito interamericano.

Este comportamiento irregular de la Comisión y de la Corte, injustificadamente, favorable a López -quien protagonizó, en su condición de Alcalde municipal, actividades represivas en respaldo al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por corrupción administrativa-, produjo de hecho, desde la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la campaña internacional de desprestigio contra la República Bolivariana de Venezuela, acusándole

de persecución política. Detalles adicionales sobre estos casos son incluidos en la Nota anexa.

Otro ejemplo, especialmente escandalizante, es el caso *Usón Ramírez contra Venezuela*, en el cual sentencia de la Corte repite el patrón de intentar estigmatizar a Venezuela por supuestas restricciones a la libertad de expresión, mediante una sentencia que, como está documentado mediante grabaciones de las deliberaciones de los magistrados, fue acordada y decidida sin haber escuchado los alegatos, sin haber escuchado a las partes, ni siquiera las respuestas a las preguntas realizadas por la propia Corte.

Esta ilegítima conducta de la Comisión y de la Corte, injustificadamente favorable a Usón Ramírez –quien protagonizó un llamado insurreccional en el ámbito militar–, produjo de hecho, desde la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la campaña internacional de desprestigio contra la República Bolivariana de Venezuela, acusándole de restringir la libertad de expresión. Detalles adicionales sobre estos casos son incluidos en la Nota anexa.

Este inventario de agravios, que a pesar de lo extenso no es ni mucho menos exhaustivo, no estaría completo sin hacer especial referencia al oprobioso caso del terrorista Raúl Díaz Peña contra Venezuela.

Se trata de la más reciente y aberrante expresión de la flagrante violación de la Convención Americana por parte de sus propias instituciones, tanto la Comisión como la Corte. Un caso que fue recibido por la Comisión, admitiendo que no se habían agotado los recursos internos en Venezuela, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que, a pesar de ello, fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual, de la forma más desvergonzada, en la sentencia del 26 de junio de 2012, aún cuando reconoció la excepción preliminar sobre la falta de agotamiento de los recursos internos, entró a conocer el fondo del asunto sobre sólo uno de los elementos: las condiciones de detención, para seguidamente, declarar que el Estado venezolano es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por tratos inhumanos y degradantes al terrorista Peña, aún y cuando en el propio texto de esa sentencia se desprende que no existían pruebas que

efectivamente pudieran acreditar la situación que fue declarada en dicha decisión. Detalles adicionales sobre estos casos son incluidos en la nota anexa.

De esta manera, un criminal convicto que atacó con bombas las representaciones diplomáticas de Colombia y España el 25 de febrero del año 2003, como parte de un plan para desestabilizar la democracia venezolana, ha usado el Sistema Interamericano como una cuarta instancia, o casación, de las decisiones justas y firmes que ha tomado el sistema jurídico de un país soberano como Venezuela. El principio de la legalidad entonces queda invertido, y el criminal se convierte en víctima de acuerdo con el peculiar criterio político, más que jurídico, del actual Sistema Interamericano, un sistema absurdo e incongruente que exige al Estado venezolano adecuar las condiciones de detención de un criminal que, paradójicamente, ha huido y se encuentra prófugo.

Resulta insólito, además de oprobioso, que un Sistema que fue creado para defender los valores más elevados asociados a los derechos humanos, sirva para abrigar los intentos descarados de victimización de un criminal que ha cometido uno de los actos más ruines contra el ser

humano y el Estado, como lo es un acto terrorista. Tal y como ha expresado la propia Corte Interamericana:

“(…) la tolerancia de infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convención, acarrearían la pérdida de autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos”.

Es por ello que, en aras de la protección de los valores y principios consagrados en las Convenciones pertinentes del Sistema Universal de Derechos Humanos, y en respeto de los principios consagrados en nuestra Constitución, nuestro país se ve obligado a distanciarse del pervertido ejercicio actual de los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los principios vinculados a los derechos humanos deben ser preservados al margen de estas instituciones viciadas que, con su práctica, han deslegitimado y desnaturalizado su rol como ga-

rantes de los compromisos contraídos por los Estados en el Pacto de San José.

Así las cosas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos obliga a reaccionar frente a estos abusos en defensa de los derechos humanos, de la dignidad de nuestro pueblo y de las instituciones democráticas, que evidentemente han sido agredidas por decisiones violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, que han tomado en estos últimos años la Comisión y la Corte. Y como gobierno respetuoso del ordenamiento jurídico, estamos obligados a rechazar todas estas decisiones que amparan delitos y delincuentes en contra de la sociedad.

Siendo que, de conformidad con la carta de la OEA, las competencias, estructura y procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran determinadas en y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la República Bolivariana de Venezuela realiza la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo cesar igualmente la Declaración emitida el 9 de agosto de 1977, al momento de la ratificación de dicha Convención.

Por lo anterior, en nombre de mi Gobierno, me permito manifestar la decisión soberana de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual, a tenor de lo dispuesto en su artículo 78, mucho apreciaré considere la presente nota como Notificación de Denuncia, para que, a partir del término establecido en la misma, cesen sus efectos internacionales, en cuanto a ella se refiere, y la competencia de sus órganos para nuestro país, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La República Bolivariana de Venezuela continuará cumpliendo con los elementos contenidos en la Carta de la OEA y en los otros instrumentos válidamente ratificados por la República en el marco de esta organización continental, en particular en todas aquellas cláusulas y disposiciones que no contradigan el espíritu, propósito y razón de la presente denuncia, suficientemente argumentado en esta nota.

La República Bolivariana de Venezuela seguirá fomentando el respeto por los principios más sagrados del derecho internacional, como la independencia, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, así como también seguirá respetando y cumpliendo con las disposiciones de los demás mecanismos de integración y cooperación internacional, particularmente aquellos que guarden relación con la promoción y protección de los derechos humanos, y en especial con el Protocolo de Asunción sobre Compromisos con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, suscrito el 19 de junio de 2005.

Quiero hacer propicia la ocasión, señor Secretario General, para expresar que la República Bolivariana de Venezuela mantendrá su firme compromiso, tal y como se ha venido realizando desde 1999, con la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia, y con la equilibrada realización de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluyendo el derecho al desarrollo, y manifiesto la firme voluntad de nuestro país por contribuir a la construcción de un Sistema Nuestro Americano de los Derechos Humanos y de los pueblos que, de forma verdaderamente independiente

e imparcial, contribuya a garantizar los derechos humanos en la región, sin tutelajes injerencistas, y en debido respeto de la soberanía, instituciones y sistemas jurídicos de los Estados.



Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores

FUNDAMENTACIÓN QUE SUSTENTA
LA DENUNCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
PRESENTADA A LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA OEA

De los hechos y los derechos que asisten a nuestro país, en la decisión soberana de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a tenor de lo dispuesto en su artículo 78.

A. De los hechos vinculados a las actuaciones de la Comisión

La República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2002 ha sido señalada por la Comisión Interamericana por situaciones que presuntamente vulneraban derechos humanos en nuestro país.

De manera sistemática durante estos años Venezuela ha señalado que la Comisión no ha actuado con objetividad y transparencia, violando el espíritu de la Convención al patrocinar la impunidad, particularmente de aquellos

individuos involucrados en los actos golpistas de abril de 2002, así como también en el paro empresarial y petrolero de diciembre de 2003. Han manipulado el derecho internacional para eliminar las culpas de los transgresores de nuestras leyes, y convertirlos en falsas víctimas de infundadas violaciones de sus derechos humanos.

Durante los últimos doce años, la República Bolivariana de Venezuela ha llamado la atención sobre múltiples casos que dan muestra de la ruptura entre la naturaleza y el espíritu con el cual fue concebida la Comisión y sus actuaciones, entre ellas:

1. La parcialidad y falta de precisión en el estudio de las condiciones que justifican la inclusión de los países en el capítulo IV del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en la región. La metodología actual que utiliza la Comisión no proporciona criterios que permitan analizar la situación de los derechos humanos de la región de forma objetiva y universal. Admite denuncias imprecisas, en las cuales no se consiguen nombres, fechas, lugares ni relación exacta de los hechos, así como tampoco medios probatorios que

acrediten debidamente los hechos denunciados. Asimismo, la Comisión establece los criterios que justifican la inclusión de un Estado en el análisis especial, pero no los parámetros que permitan la exclusión de un país de dicho capítulo. Nuestro país ha sostenido, que el contenido del informe anual debe ajustarse a lo definido en el literal a) del numeral primero del artículo 59 del reglamento de la propia CIDH y en tal sentido, registrar “un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, junto con las recomendaciones a los Estados y órganos de la OEA sobre las medidas necesarias para fortalecer el respeto de los derechos humanos”.

2. Interferencia en la práctica legislativa soberana de la nación, al admitir y divulgar denuncias sobre hechos hipotéticos, futuros e inciertos, tales como los efectos que podría tener la aprobación o no de determinadas leyes, lo cual además constituye una afrenta a la soberanía del Estado Venezolano, en el ejercicio de funciones y competencias de un poder Público Nacional. Dos casos, en particular, son ejemplares de esta modalidad de presión foránea e injerencista que ha recibido Venezuela:

- La Comisión emitió un comunicado el 3 de diciembre de 2010 en el que expuso consideraciones de fondo contra el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, antes de que éste fuera aprobado por la Asamblea Nacional, lo cual ocurrió diez días después, el 13 de diciembre de 2010, cuando adoptó el nombre de “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”.
- De igual modo, la Comisión emitió un comunicado el 15 de diciembre de 2010 en el que expuso consideraciones de fondo contra la Ley Habilitante, antes de que ésta fuese aprobada por la Asamblea Nacional, hecho que ocurrió dos días después, el 17 de diciembre de 2010.

3. Imprecisión en los términos de las medidas cautelares y peticiones individuales. Con relación a éstas, se ha observado la ausencia de una fundamentación expresa y equitativa en el cumplimiento de lo que señala el Reglamento de la Comisión para el establecimiento de las medidas cautelares, las cuales deberían incluir un análisis concreto para determinar

que la situación cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y prevención de daños irreparables. En sus Informes de establecimiento de Medidas Cautelares, la Comisión no explica, con fundamentos jurídicos, cómo una situación específica se ajusta a estos requisitos; sino que se limita a enunciar que, “en su criterio”, las circunstancias son típicas. Las medidas cautelares y provisionales deberían estar caracterizadas por la revocabilidad, la accesoriedad, la extrema gravedad y urgencia real. Sin embargo, la Comisión no garantiza que estas medidas estén sujetas a un sistema de revisión periódica, que garantice su carácter esencialmente transitorio.

4. Plazos de los procedimientos de la comisión. Revisando el repertorio de peticiones y medidas cautelares conocidas por la Comisión Interamericana, se puede observar que no existen criterios claros, que permitan determinar cuándo un caso se encuentra detenido, ya sea por falta de información o por pérdida de interés de los peticionarios, si efectivamente se han cometido violaciones en el marco de la Declaración Americana o de la Convención Americana. Mantener los casos abiertos, sin el interés manifiesto de las

víctimas, tampoco es de interés de ningún sistema internacional de Protección a los Derechos Humanos pues, los procedimientos abiertos irresolutos afectan la percepción de su capacidad de resolución de los conflictos.

5. La discrecionalidad y laxitud con la cual se han dado a la reinterpretación de sus mandatos y reglamentos, llegando incluso a actuar más allá del art. 106 de la Carta de la OEA, intentando ejercer el rol de implementadores de la Convención al formular “recomendaciones” que claramente van más allá del mandato de la Comisión.

6. La negligencia cómplice del Secretario Ejecutivo Santiago Cantón y el reconocimiento de la Comisión al golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y a las autoridades de facto del régimen golpista. A pocas horas del golpe de Estado que dio al traste con la Democracia, la estabilidad, las autoridades e instituciones de Venezuela, la Asociación para la Promoción Social Alternativa —Minga de Colombia— solicitó a la Comisión, Medidas Cautelares para el Presidente Constitucional Hugo Chávez Frías,

a razón de su secuestro y aislamiento. El día 13 de abril de 2002, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, remitió una carta a las autoridades golpistas, solicitándole al “excelentísimo” Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, información sobre “el señor Hugo Chávez Frías”, desconociendo de esta manera su investidura como Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y legitimando a las autoridades inconstitucionales y de facto que emanaban del golpe de Estado.

La Comisión nunca otorgó medidas cautelares a favor del Presidente Hugo Chávez durante el secuestro en el que permaneció incomunicado los días 11, 12 y 13 de abril, corriendo riesgo de muerte. Tampoco se presentaron excusas por la falta de actuación debida con relación a un gobierno golpista. La Comisión no otorgó medidas cautelares a favor del entonces Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, quien también fue secuestrado y agredido ante las cámaras de televisión, y para quien también MINGA habría solicitado actuación urgente de la OEA.

7. La imposibilidad de hacer las reformas necesarias en un Sistema que ha sido profundamente cuestionado por la mayoría abrumadora de los miembros de la OEA. La imposibilidad de mejorar quedó en evidencia durante el 42º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, del pasado mes de junio, en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la avalancha de cuestionamientos, el Consejo Permanente de la OEA designó un Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual presentó sus conclusiones el 25 de enero de 2012, mediante el informe CP/doc.4675/12, las cuales debían ser respaldadas mediante el mandato de una resolución que debía ser adoptada en la citada Asamblea del Órgano regional.

En el informe se formularon las siguientes recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

- a. Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de recursos internos para evitar procesos paralelos entre instancias nacionales y la CIDH.
- b. Desarrollar y ampliar los criterios para el archivo de peticiones y casos, incluyendo principalmente aquellos de larga inactividad procesal.
- c. Poner en práctica plazos (al menos indicativos) para cada etapa de procedimiento.
- d. Definir criterios o parámetros objetivos y fundar y motivar la procedencia del mecanismo excepcional de acumulación de las etapas de admisibilidad y fondo.
- e. Establecer mecanismos para determinar e individualizar a las presuntas víctimas.
- f. Asegurar una pronta notificación de peticiones iniciales a Estados, inmediatamente después de terminada la etapa de registro.
- g. Una actualización de los hechos materia de las peticiones iniciales cuando sean transmitidas a los

- Estados con considerable posterioridad a su registro, o bien en casos de larga inactividad procesal.
- h. Continuar desarrollando criterios objetivos para determinar prioridades en cuanto al tratamiento de peticiones y otros casos, a la luz de la naturaleza, complejidad e impacto de las situaciones alegadas.
 - i. Otorgar plazos y prórrogas razonables a los Estados para transmitir observaciones, tomando en cuenta la antigüedad de los hechos reclamados en la petición, el volumen de sus antecedentes y/o la complejidad del asunto.
 - j. Otorgar plazos y prórrogas razonables a los Estados para el seguimiento de las recomendaciones que la CIDH formule, a la luz de la naturaleza de éstas, así como del alcance de las acciones que se requieren del Estado, según corresponda, conforme a la normatividad aplicable.
 - k. Mejorar los mecanismos de acceso a expedientes en formato electrónico de las peticiones y casos a los Estados, peticionarios y víctimas concernidas a efecto de promover la pronta solución de dichos asuntos.

- l. Considerar el desarrollo de un mecanismo electrónico que tienda a la sistematización de los antecedentes, informes y decisiones de la CIDH.

Estas recomendaciones, aun cuando habían sido aprobadas por el Consejo Permanente no pudieron ser adoptadas debido a la resistencia de dos países, entre ellos Estados Unidos, quienes señalaron que dichas recomendaciones no eran de obligatorio cumplimiento para sus Estados.

En la única Resolución que se logró adoptar en Cochabamba para rescatar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, Estados Unidos, en su ejercicio ya común de pretendida supremacía y autoexclusión, introdujo un ambiguo pie de página, más largo que la misma resolución, en el cual reiteró su posición de no vincularse con las recomendaciones, demostrando con su propia actitud la inoperancia absoluta de este Sistema parcializado de Derechos Humanos, en donde Estados Unidos ejerce, con el mayor descaro, un ejercicio que debe ser objeto del más fuerte y categórico rechazo, pues hace imposible modificar y corregir los errores de las malas prácticas de los órganos del Sistema y, por tanto, impide fortalecerlo, con

el agravante que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende no se somete a sus órganos.

Es un Sistema, por tanto, que ha sido secuestrado por la mala voluntad de unos pocos Estados que ejercen sobre ellos su total control y dominio.

A. De los casos presentados por la Comisión ante la Corte

Conforme al Artículo 50 de la Convención Americana, la Comisión está facultada para presentar ante la Corte Interamericana los casos que considere con mérito suficiente, luego de la emisión del Informe de Fondo.

Este esquema de operatividad entre la Comisión y la Corte ha permitido a éstos órganos, de manera articulada, actuar en contra de la República Bolivariana de Venezuela **mediante la admisión de denuncias sobre casos que cursaban y estaban siendo procesados por las instancias judiciales del país, o admitiendo denuncias que nunca fueron presentadas ante éstas, violando así flagrantemente el artículo 46.1 de la Convención Americana.**

Pasaremos a detallar algunos casos precisos viciados por inadmisibles:

• Casos Ríos, Perozo y otros, contra Venezuela¹

El 27 de febrero de 2004, la Comisión Interamericana admitió dos casos interpuestos por periodistas de los canales RCTV (Caso Luisana Ríos el 23 de julio de 2002) y Globovisión (Caso Gabriela Perozo el 22 de junio de 2003) por las supuestas agresiones de las cuales habrían sido víctimas.

Estos casos nunca debieron ser admitidos pues los denunciantes no habían agotado los recursos internos. Con esta admisión, la Comisión propició que se desatara una campaña mediática de desprestigio contra el gobierno venezolano.

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ríos y otros contra Venezuela. Sentencia de Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie Con. 194. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Perozo y otros contra Venezuela. Sentencia de Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie Con. 195.

La Corte Interamericana falló, el 28 de enero y el 3 de marzo de 2009, respectivamente, determinando que el Estado venezolano y el Gobierno del Presidente Chávez no habían violado los derechos a la libertad de expresión, propiedad e igualdad ante la Ley de ninguno de estos canales de televisión.

A falta de evidencias, la Corte optó por señalar “que el Estado falló en su obligación de garantizar que otras personas (particulares) no impidieran a los canales el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y la integridad personal”. Estos son los típicos casos sin fundamento, ni procedimental ni de fondo, contruidos para constituir un expediente falso contra el gobierno venezolano, quedando en evidencia la parcialidad descarada con los factores denunciadores, que representan a la derecha opositora del gobierno.

• **Caso Allan Brewer Carías contra Venezuela**

El 8 de septiembre de 2009 la Comisión admitió la petición hecha el 24 de enero de 2007 por un grupo de abogados, en la cual se alegaba que los tribunales venezolanos eran responsables de la “persecución política del

constitucionalista Allan R. Brewer Carías en el contexto de un proceso judicial en su contra por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución, en el contexto de los **hechos ocurridos** entre el 11 y el 13 de abril de 2002”.

Cabe destacar que al mencionado señor Brewer Carías se le sigue juicio en Venezuela por su participación en el golpe de Estado de abril de 2002, por ser redactor del decreto mediante el cual se instalaba un Presidente de facto, se abolía la Constitución Nacional, se cambiaba el nombre de la República, se desconocían todas las instituciones del Estado, se destituían a todos los miembros y representantes de los Poderes Públicos, entre otros elementos.

Al admitir la petición, la CIDH instó al Estado venezolano a “adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial”, con lo cual prejuzgaba que dicha independencia no existía.

El 7 de marzo de 2012, la Comisión informó al Estado venezolano que el caso sería llevado a la Corte, a pesar de que no se habían agotado los recursos internos. Este ejemplo es más grave, debido a que el juicio penal

contra Allan Brewer no se ha podido llevar a cabo en Venezuela, en virtud de que nuestra legislación procesal penal no permite que el juicio pueda realizarse en ausencia del imputado, y es el caso que el imputado Brewer Carías huyó del país, como se conoce públicamente, encontrándose prófugo de la justicia hasta la fecha.

• **Caso Díaz Peña contra Venezuela**²

El señor Raúl Díaz Peña fue acusado penalmente en Venezuela por su participación en dos actos terroristas con artefactos explosivos (bombas), contra el Consulado General de la República de Colombia en Caracas y contra la Embajada del Reino de España en Caracas en 2003.

El 29 de abril de 2008 fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión “por *los delitos de intimidación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves*”. Este terrorista logró escapar y viajó ilegalmente a Miami, Estados Unidos, en septiembre de 2010, encontrándose prófugo de la justicia.

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Díaz Peña versus Venezuela. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. 26 de junio de 2012.

El 12 de octubre de 2005, **la Comisión Interamericana de Derechos Humanos** recibió una petición presentada a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña en la cual se alega la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección de la honra y la dignidad. Posteriormente, los peticionarios agregaron a la petición alegatos sobre la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, derecho de reunión, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

La República Bolivariana de Venezuela, mediante un escrito del 3 de mayo de 2007, presentó sus observaciones a la petición, en las cuales se refirió al proceso penal seguido en contra del señor Díaz Peña; rechazó en todos sus términos lo expuesto en el escrito de petición y sostuvo que el caso no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitido ante la Comisión considerando, entre otras cosas, que se trataba de un proceso que, para entonces, estaba aún abierto ante los organismos competentes del Estado. En los escritos del 5 y 8 de agosto de 2007, la República Bolivariana de Venezuela reiteró la excepción preliminar de la falta de agotamiento de los recursos internos.

Durante el trámite del caso, la República Bolivariana de Venezuela ratificó que no se cumplían las condiciones de admisibilidad contenidas en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos³, que incorpora el principio de complementariedad del Sistema al procedimiento de recepción de peticiones.

3. Artículo 46. 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

El preámbulo de la Convención Americana reconoce “que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.

En tal sentido, la Convención exige que para que una petición sea admisible, es necesario que se hayan agotado todos los recursos eficaces y adecuados para satisfacer la situación jurídica alegadamente infringida.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la Comisión Interamericana debe realizar un examen apropiado de las circunstancias del caso⁴, a los fines de determinar la procedencia de la excepción preliminar del no agotamiento de los recursos internos.

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 26 de junio de 1987 (Excepciones Preliminares) e Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 26 de julio de 1988 (Fondo).

Sin embargo, en su informe de admisibilidad de 20 de marzo de 2009, la Comisión decidió declarar el reclamo admisible a los efectos del examen de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 15, 24 y 25 de la Convención Americana.

En el análisis sobre la competencia e inadmisibilidad realizado, la Comisión Interamericana indicó que el peticionario había interpuesto varios recursos dirigidos a remediar la situación supuestamente infringida, sin aclarar de qué manera estos recursos habían podido agotar la jurisdicción interna.

En las observaciones sobre el fondo, la República Bolivariana de Venezuela reiteró los alegatos de inadmisibilidad, por cuanto el acusado tenía a su disposición el recurso de apelación e incluso el recurso de revisión constitucional. Aún más, el Estado venezolano indicó a la Comisión Interamericana que al momento de la presentación de la petición, los tribunales venezolanos continuaban conociendo del proceso.

A pesar de ello, la Comisión Interamericana ordenó reparar las supuestas violaciones de derechos humanos supuestamente infringidas y el 12 de noviembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos so-

metió a la jurisdicción de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso 12.703 en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

El 26 de junio de 2012 la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** dictó sentencia en el Caso Díaz Peña en contra de la República Bolivariana de Venezuela, luego de que el 24 de mayo de 2011, el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares⁵ y contestación a los escritos de sometimiento del caso y de solicitudes, argumentos y pruebas. En su contestación, Venezuela rechazó su responsabilidad internacional por la violación de los derechos alegados por la Comisión y por la representante al tiempo que solicitó a la Corte que declarara sin lugar el informe de fondo presentado por la Comisión Interamericana, ya que el mismo se realizó sobre la base de un examen escueto, parcial y extralimitado de su mandato y sobre las condiciones de admisibilidad de la petición.

5. Una de las dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado era una alegación de “falta de imparcialidad” de algunos de los Jueces y del Secretario de la Corte.

Y he aquí el hecho que denota porqué este caso se convierte en emblemático a la hora de demostrar la práctica perversa y transgresora de la Comisión y de la Corte: en el examen de las condiciones de admisibilidad de esta denuncia, la Corte reconoció que no se habían agotado los recursos internos pues la Comisión había hecho referencia a solicitudes presentadas después de la petición inicial ante la Comisión. La Corte observó también que, cuando se trasladó la petición inicial al Estado, el 23 de febrero de 2007, aún no se había emitido la decisión de 11 de mayo de 2007 que, según la Comisión, habría agotado los recursos internos.

A pesar de determinar que el caso era inadmisibile, la Corte cometió un nuevo agravio contra los principios consagrados en la Carta de la OEA, contra la Convención y contra la República Bolivariana de Venezuela. En lugar de declarar improcedente el trámite en su totalidad, procedió al análisis de los asuntos de fondo de un caso que era, aún para la Corte, evidentemente inadmisibile.

La Corte y la Comisión han incumplido en el caso Peña de forma evidente las normas que le sirven de fuen-

te, afectando descaradamente los principios de subsidiaridad y complementariedad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos previstos en el Preámbulo de la Convención.

Las normas convencionales referidas a la excepción preliminar de agotamiento de los recursos internos comprenden claramente la petición con un documento único, y se refieren reiteradamente a la denuncia que la contiene como una unidad fundamental⁶. Por ello, proceder al trámite de fondo de segmentos o secciones parciales de la denuncia, a pesar de no cumplir con las condiciones de inadmisibilidat, resulta una interpretación acomodaticia e ilegal del artículo 46 de la Convención.

En cuanto a la declaración en la Sentencia sobre las condiciones de reclusión y deterioro de la salud del terrorista, que usaron para justificar la condena contra la República Bolivariana de Venezuela, es necesario observar que la misma Sentencia admite “es un hecho probado que, con posterioridad a las medidas cautelares adoptadas, las condiciones materiales de detención fueron me-

6. Cfr. Artículo 46 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (...).

porando progresivamente⁷ y señalan que el detenido recibió, consecuentemente, diversas atenciones médicas”⁸.

A pesar de estas expresiones que denotan la evidente falta de motivación para la Sentencia, la Corte concluyó condenado a la República Bolivariana de Venezuela⁹ a mejorar las condiciones de reclusión de un terrorista que se fugó de la justicia y que no cumplió con su condena.

Lo anterior hace intolerable para cualquier país democrático y respetuoso del Estado de derecho mantenerse silente ante un sistema de derechos evidentemente corrompido y que actúa al margen de los principios y valores que están llamados a proteger, y que todo lo contrario, terminan convirtiéndose en cómplices protectores de convictos terroristas.

7. Sentencia Díaz Peña vs. Venezuela. Párr. 94.

8. Crf. Párrs. 100 a 107.

9. Sentencia Díaz Peña vs. Venezuela. Voto disidente del Juez Eduardo Vio Grossi.

Caso Usón Ramírez contra Venezuela¹⁰

La causa del general (r) Francisco Usón Ramírez vs. Venezuela fue sometida a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana el 25 de julio de 2008, produciéndose la sentencia el 20 de noviembre de 2009.

La audiencia pública tuvo lugar el 1 de abril de 2009, en Santo Domingo, República Dominicana, y Venezuela solicitó la grabación digital de dicha audiencia. La grabación, que fue entregada a Venezuela por la Corte, no sólo contenía el audio de la audiencia pública, sino además, otro audio en el que se aprecia que ocurrió una deliberación entre los magistrados de la Corte al día siguiente, 2 de abril, en la cual discutieron el proyecto de sentencia del caso, y decidieron antes de haber escuchado los alegatos de Venezuela y sin haber escuchado las respuestas de las Partes a las preguntas realizadas por la propia Corte durante la audiencia oral.

10. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez versus Venezuela. Excepción Preliminar, fondo reparaciones y costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207.

Durante esa deliberación grabada, se evidencia que los jueces armaron el contenido de la Sentencia sin escuchar los alegatos de las partes y actuando en ese conciliábulo, determinaron los criterios para condenar a la República Bolivariana de Venezuela, acordando entre ellos aceptar **que se incluyera una presunta violación a la libertad de expresión en los términos de la Sentencia, a pesar de que los hechos que justifican la demanda constituyen presuntas violaciones relacionadas con los derechos al debido proceso y garantías judiciales en particular con los temas de justicia militar**¹¹.

La Sentencia definitiva de la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano, por violación del principio de legalidad y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, del derecho a las garantías judiciales, del derecho a la protección judicial, y del derecho a la libertad personal, tal como lo habían planificado el 2 de abril de 2009.

11. Grabación de las Deliberaciones de los Magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Francisco Usón versus Venezuela.

•Caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela¹²

Este carácter se refiere a tres jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, designados con carácter provisorio, quienes en ejercicio de sus funciones, cometieron un “grave error jurídico de carácter inexcusable” que generó su destitución por parte de los organismos con competencia disciplinaria judicial.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008 declaró que el Estado venezolano violó, con la destitución de los exmagistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., sus derechos referidos al debido proceso, en particular, de acuerdo a la Corte: ser juzgados por un tribunal imparcial, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, a ser oídos.

La Corte ordenó al Estado venezolano hacer modificaciones a las leyes nacionales, indemnizar a los exjueces por concepto de daño material e inmaterial y su reintegro al Poder Judicial.

12. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros versus Venezuela. Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la supuesta constatación de la presunta violación de los derechos o libertades protegidos por la Convención, trató de dictar pautas de carácter obligatorio sobre el Gobierno y sobre la administración del Poder Judicial, que son competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia, pretendiendo, incluso, establecer directrices para el Poder Legislativo en materia de carrera judicial y responsabilidad de los jueces, violentando la soberanía del Estado venezolano en la organización de los poderes públicos y en la selección de sus funcionarios, lo cual resulta inadmisibles.

Este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un agravio a las propias disposiciones del preámbulo de la Convención Americana, toda vez que violenta y malinterpreta el principio de complementariedad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, al pretender juzgar, como lo haría un tribunal nacional, respecto a disposiciones de derecho interno.

La Corte Interamericana, al extralimitarse en sus funciones, cometió incluso imprecisiones acerca de las denominaciones del derecho interno venezolano, lo cual

constituye una demostración de la reprochable práctica de la Corte y de la Comisión de pretender interpretar disposiciones que son de exclusivo conocimiento de los tribunales nacionales, facilitando que algunos transgresores de nuestra legislación hayan comenzado a usar esa jurisdicción internacional como una “cuarta Instancia” judicial.

En efecto, el párrafo 147 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008 dispone que la omisión de la Asamblea Nacional de dictar el Código de Ética del Juez o Jueza Venezolano “ha influido en el presente caso, puesto que las víctimas fueron juzgadas por un órgano excepcional que no tiene una estabilidad definida y cuyos miembros pueden ser nombrados o removidos sin procedimientos previamente establecidos y a la sola discreción del TSJ”. Sorprendentemente, en ese mismo párrafo afirma que no se pudo comprobar que la Comisión de Emergencia y Reestructuración del Poder Judicial haya incurrido en desviación de poder, o que fuera presionada directamente por el Ejecutivo Nacional para destituir a los mencionados exjueces y luego concluye en el cardinal 6 del Capítulo X que “no ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca de independencia”.

Es evidente que la Corte Interamericana, al no limitarse a ordenar una indemnización, utilizó el fallo para intervenir inaceptablemente en asuntos del Estado al ordenar la reincorporación de jueces que el orden jurídico nacional considera legítimamente destituidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias que afectan principios y valores de orden Constitucional y Convencional, afectan al sistema de justicia y que no solo pretenden garantizar los derechos humanos de personas presuntamente agraviadas sino menoscabar la autonomía soberana de los órganos de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró, el 18 de diciembre de 2008, que el fallo de la Corte era INEJECUTABLE.

• **Caso Leopoldo López contra Venezuela**¹³

Es el caso que al ciudadano Leopoldo López le fueron impuestas sanciones por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de dos procesos administrativos:

1. La primera investigación de la que fue objeto el señor López Mendoza se relacionaba con hechos ocurridos mientras desempeñaba un cargo en la empresa Petróleos de Venezuela S.A. siendo entonces empleado de la empresa estatal PDVSA, la Organización No Gubernamental “Primero Justicia” (de la cual era miembro el señor López) recibió una cuantiosa donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, que entonces ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Públicos de la División de Servicios de PDVSA Petróleo y Gas S.A. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela determinó que esa donación contravino las Normas Sobre Conflicto de

13. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza versus Venezuela. Sentencia de Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233.

Interés ya que “existe un conflicto de interés de PDVSA y el de un empleado o grupo de sus trabajadores, cuando en una decisión, acto o contrato de la Empresa, el trabajador o los trabajadores que tomen parte o influyen en tal decisión, acto o contrato se benefician en lo personal o favorecen a sus familiares inmediatos (...)”.

2. La segunda investigación se circunscribió a hechos vinculados a sus actuaciones como Alcalde, cargo que desempeñó entre los años 2000 y 2004.

En noviembre de 2008, Leopoldo López fue sancionado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por la Contraloría General de la República, por haber violado normas que constituyen actos de corrupción administrativa.

El caso No. 12.668 de Leopoldo López Mendoza se originó mediante petición recibida en la Comisión el 4 de marzo de 2008 y registrada bajo el No. 275-08. El 25 de julio de 2008 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 67/08. El 8 de agosto de 2009 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 92/09 y lo transmitió a la República Bolivariana de Venezuela. El 14 de diciem-

bre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela en relación con este caso.

La Comisión y los representantes del ciudadano López Mendoza solicitaron a la Corte que declarara al Estado venezolano responsable de la violación de los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, conjuntamente con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio del señor López Mendoza. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos.

Cabe mencionar que el 26 de septiembre de 2005, el Contralor General emitió una resolución¹⁴ mediante la cual, tomando en cuenta la gravedad de las irregularidades cometidas y sancionadas con la responsabilidad administrativa, y el procedimiento previsto en la Ley de Orgánica de la Contraloría General de la República, impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, señalando que “la gravedad de la irre-

14. Cfr. resolución 01-00-235 de 26 de septiembre de 2005 emitida por el Contralor General de la República.

gularidad cometida, sancionada con la declaratoria de responsabilidad administrativa de fecha 2 de noviembre de 2004, [que había quedado en firme el 28 de marzo de 2005], así como la reincidencia de una conducta irregular que ha sido objeto de sanción en los términos aludidos precedentemente”, se determinó “imponer al [señor] LÓPEZ MENDOZA, [...], la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de seis (06) años”.¹⁵

La Corte consideró que las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico interno violentaban el derecho a ser elegido, el deber de motivación, el derecho a la

15. Resolución 01-00-235 de 26 de septiembre de 2005 emitida por el Contralor General de la República. El 27 de octubre de 2005 se notificó la resolución al señor López Mendoza. En el oficio correspondiente se le informó que “contra dicha decisión podría interponer recurso de reconsideración ante el [...] Contralor [...], en un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de [la] notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Asimismo, se indicó que “podría interponer el correspondiente recurso de nulidad [...] ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de seis (6) meses contados a partir de la fecha de [...] notificación, de conformidad con lo dispuesto en el aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”. Oficio No. 08-01-1074 de 27 de septiembre de 2005 de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

protección judicial y la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana.

El ciudadano López Mendoza no agotó los recursos internos antes de acudir al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, pues la resolución por medio de la cual el Contralor General impuso la Sanción de Inhabilitación quedó perfectamente firme al no ser impugnada ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La petición del ciudadano Leopoldo López ante el sistema interamericano debió ser declarada inadmisibile a los efectos de resguardar la complementariedad del sistema conforme al artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte no consideró que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado otras convenciones y tratados, adquiriendo otras obligaciones como, por ejemplo, mediante la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, la cual obliga a los Estados Americanos a “tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio”, sin exigir que tales medidas sean

necesariamente jurisdiccionales. En efecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción insta a los Estados a promover y fortalecer los “mecanismos” necesarios (no exclusivamente judiciales) para sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Igualmente, Venezuela es país signatario de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, suscrita en el año 2003, cuyo objetivo es la introducción de un conjunto de normas y medidas que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos destinados a la lucha contra la corrupción. Vale la pena destacar que la protección de la soberanía de los Estados expresamente se declara en el artículo 4 del tratado:

1. Los Estados Partes cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente interpretó acomodaticiamente los objetivos de la Convención Americana, al cuestionar el rol y las competencias de los Poderes Públicos venezolanos, asumiendo de manera parcializada los argumentos manipulados de la derecha opositora, excediendo en consecuencia sus funciones.

C. Del Derecho Constitucional que asiste a la República Bolivariana de Venezuela

El artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que **“la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”**, por lo que todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a ella.

Bajo el estamento que impone el **“Principio de Supremacía Constitucional”** contenido en el citado **artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**; no puede dejar de advertirse que es nuestro mismo Texto Constitucional, el que delimita el supuesto de que “...las relaciones internacionales

de la República responden a los fines del Estado en función del ***ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo***"; y que en desarrollo de tal proclama, las relaciones internacionales se enmarcan en los principios de interdependencia, **igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad**; proclamas estas que encuentran consagración en el **artículo 152** de nuestro **Texto Constitucional**, en cuya parte *in fine* se establece que la República está llamada a mantener **"... la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales"**.

La República Bolivariana de Venezuela, histórica y ancestralmente, es un pueblo profundamente amante de la paz, y profusamente garantista de los derechos humanos, al punto de reconocer a los mismos, **como uno de los principios rectores del Estado venezolano**, cuando en su **artículo 2**, se establece que Venezuela

"... se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico...", entre otros, el de la **preeminencia de los derechos humanos**.

De manera que, nuestro glorioso país, se ha colocado a la vanguardia del Sistema Interamericano al adoptar, además de los referidos postulados y **con carácter constitucional**, otros principios medulares y cardinales de la protección de los derechos humanos, por cuanto: a) Se establece que el Estado garantizará a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, **conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna** (Vgr. **artículo 19** de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); b) Establece el **principio de no taxatividad y el carácter enunciativo de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, respecto a otros derechos que no figuren de manera expresa en tales textos** (Vgr. **artículo 22** del indicado Texto Constitucional); y, c) Establece el principio de **"Imprescriptibilidad de las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, así**

como las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra” (Vgr. artículo 29, *eiusdem*), tan sólo por mencionar algunas disposiciones de rango constitucional que dan cuenta del profundo respeto que el Estado venezolano y su institucionalidad democrática aseguran a la efectividad y cumplimiento de tales principios.

Asimismo, dentro del contexto de los referidos postulados de carácter constitucional, conforme al artículo 23 de ese texto normativo, se consagra que los Tratados, Pactos y Convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Sin embargo, el alcance de la referida disposición constitucional ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia vinculante proferida por su Sala Constitucional, mediante Decisión No. 1572/2008, relacionada al fallo de la Corte Interame-

ricana del 5 de agosto de 2008, en la cual se sentenció que “el artículo 23 de la Constitución no otorga a los tratados internacionales sobre derechos humanos rango “**supraconstitucional**”, por lo que, en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta Fundamental y una norma de un pacto internacional, correspondería al Poder Judicial determinar cuál sería la aplicable, tomando en consideración tanto lo dispuesto en la citada norma como en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo al contenido de los artículos 7, 266.6, 334, 335, 336.11 de la Constitución y en la Decisión No. 1077/2000 de la Sala Constitucional.

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su Decisión No. 1942/2003 precisó, en relación con el artículo 23 constitucional, lo siguiente:

“A juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23. 1) Se trata de derechos humanos aplicables a las personas naturales; 2) Se refiere a normas que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de instituciones, resoluciones de organismos, etc., prescritos en los Tratados, sino sólo a normas creativas de derechos humanos (...).

Repite la Sala, que se trata de una prevalencia de las normas que conforman los Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) relativos a derechos humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos internacionales, que pretendan interpretar el alcance de las normas de los instrumentos internacionales, ya que el artículo 23 constitucional es claro: la jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la vigente Constitución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y que es la Sala Constitucional, y así se declara (...).

Resulta así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios prevalecen en el orden interno (...).

Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en Tratados ni en otros textos internacio-

nales sobre Derechos Humanos suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que, de ello ser posible, se estaría ante una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes (...).

A las decisiones de esos organismos se les dará cumplimiento en Gil Dais, conforme a lo que establezcan la Constitución y las Leyes, siempre que ellas no contraríen lo establecido en el artículo 7 de la vigente Constitución, el cual reza. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución siempre que se ajusten a las competencias orgánicas, señaladas en los Convenios y Tratados. Debido a ello,

a pesar del respeto del Poder Judicial hacia los fallos o dictámenes de esos organismos, éstos no pueden violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como no pueden infringir la normativa de los Tratados y Convenios, que rigen esos amparos u otras decisiones.

Si un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país, tal decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos internacionales protectores de los derechos humanos (...).

La Sala considera que, por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional no existe órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la Ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la decisión que se contradiga con las normas constitucionales venezolanas carece de aplicación en el país, y así se declara (...).

Los artículos 73 y 153 constitucionales contemplan la posibilidad que puedan transferirse competencias venezolanas a órganos supranacionales, a los

que se reconoce que puedan inmiscuirse en la soberanía nacional.

Pero la misma Constitución señala las áreas donde ello podría ocurrir, cuales son —por ejemplo— las de integración latinoamericana y caribeña (artículo 153 **eiusdem**). Áreas diversas de los derechos humanos **per se**, y donde las sentencias que se dicten son de aplicación inmediata en el territorio de los países miembros, como lo apunta el artículo 91 de la Ley Aprobatoria del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Entiende la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional no puede sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1 constitucional, que establece como derechos irrenunciables de la Nación: “la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad y la autodeterminación nacional. Dichos derechos constitucionales son irrenunciables, no están sujetos a ser relajados, excepto que la propia Carta Fundamental lo señale, conjuntamente con los mecanismos que lo hagan posible, tales como los contemplados en los artículos 73 y 336.5 constitucionales, por ejemplo.

Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República” (subrayados en el fallo original).

La postura de la República Bolivariana de Venezuela que se promueve mediante la presente, lejos de colocar a nuestro Estado al margen de la comunidad internacional, tal como se pretende mediante una campaña sistemática orientada a perturbar nuestras firmes convicciones; pretende izar a través de la difusión de nuestra Carta Magna, la bandera en que se cimientan las bases de nuestro Estado, profundamente amante de los Derechos Humanos, y con ello patentizar todas las actuaciones que permitan asegurar el fin y cometidos esenciales plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratando de evitar elementos que puedan perturbar la sana paz de la República y del glorioso pueblo de Venezuela, frente a una metódica y sistemática campaña en avalancha, que pretende manchar el buen nombre, los intereses y la dignidad de la Patria de Bolívar.

De igual manera, nuestro compromiso y lealtad con el depositario de la soberanía, —que reside intransferiblemente en el pueblo, en atención a lo previsto en el **artículo 5** de la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**—; nos impone el aseguramiento de los principios de **independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación, solución pacífica de los conflictos internacionales, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad, —tal como se señaló anteriormente—**, obligándonos a mantener desde todos los estamentos del Poder Público la más firme y decidida defensa de esos principios y su práctica en todos los organismos e instituciones internacionales, enmarcados en la impregnada noción de soberanía, a la que debe responder las relaciones internacionales que la República está llamada a mantener con los pueblos del mundo.

En virtud de todo lo anteriormente señalado, y frente al hecho que **reiteradas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos coliden con los preceptos y principios de nuestra Carta Magna e, incluso, con la propia Convención**

Americana de Derechos Humanos, es razón por la que la República Bolivariana de Venezuela considera importante poner fin a la incompatibilidad entre nuestra legislación interna y nuestros derechos soberanos, distanciándonos del perverso ejercicio de los órganos competentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, nuestro país, en esta fecha, ha procedido a notificar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a tenor de lo dispuesto en su artículo 78.

Denunciation and withdrawal by
Venezuela of and from the
Inter-American Human Rights Court
(IAHRC)

Nicolás Maduro Moros
Hugo Chávez Frías

Foreword

The Bolivarian government and other Latin American progressive heads of state have denounced many times in many places the use of some international organizations, especially the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), by the United States and its interventionist policy in Latin America.

This document offers some words and writings of Commander Chávez and President Nicolás Maduro expressing the insurgent thinking of the men and women who struggle today for a true independence of the peoples south of the Rio Bravo.

The reading of these writings helps us to understand the mechanisms of intervention and domination of the United States, which also has the nerve not to be part of the Human Right System or recognize its jurisdiction.

This is a document for discussion. It contains useful letters and statements to understand the decision of the brave Venezuelan people to withdraw from the IACHR.

President Maduro recalls “in 2002, the Human Rights Commission was the only multilateral organization that recognized Pedro Carmona as the head of government in Venezuela”.

Remarks of the President of
the Bolivarian Republic of Venezuela,
Nicolás Maduro Moros,
on Venezuela’s withdrawal from the
Inter-American Human Rights Court (IAHRC)

President Nicolás Maduro:

With regard to the IACHR, they (the opposition) mobilized the dinosaurs remaining out there; many of them prosecuted for corruption, former governors, among others. They mobilized their dinosaurs to come out to explain why we left the IACHR. Venezuela knows why.

They mobilized their spokespeople, but I gave this information and they know it is true: By the end of July, a special meeting was held in the White House to assess the situation in Venezuela. They said “The regime is getting stronger. We could not discredit the victory of the revolutionary Government on April 14. They began to occupy some spaces... and to develop the project with a good participation of the people.” The scenario they had imagined is not unfolding: once we lost Commander Chávez, chaos would break out.

It's good that we remind Venezuelans that the Inter-American Human Rights System was a positive initiative to create a system that would protect human rights across the continent, and Venezuela is one of the first countries that joined the system and the San Jose Convention. The United States is not part of the Human Rights System, it does not recognize it, and it does not recognize its jurisdiction.

This is an important point to be analyzed: The U.S. does not recognize the jurisdiction of the Court or the Commission, but they are sharp, the Commission's headquarters is in Washington DC, and the international bureaucracy that has been created is prepared in Georgetown University, especially at the University of Washington.

Almost all the members of the IACHR's and bureaucracy are controlled by the interests of the U.S. State Department. It is a reality that must be told. We can not water it down. The so-called Human Rights System and the Inter-American Court in the Commission drifted into an instrument of persecution against progressive governments that began when President Chávez came to

power in 1999. Unfortunately, it could not be otherwise because the first 60 years of the OAS and the entire Inter American System operated as a Pan-American system designed to secure the influence and hegemony of the United States on Latin America and the Caribbean.

The OAS is another story, although it is part of the same System. The agreements that create the Inter-American Human Rights System are approved within the framework of the OAS negotiations, and the US does not recognize it. It was transformed into a persecution system and they went so far that, in 2002, the IACHR was the only multilateral organization that recognized Pedro Carmona as head of government in Venezuela. It was enough for everyone to resign.

We could tell you many stories, a hundred stories about the IACHR, the Commission and the Court. They consider themselves as a supranational power; they believe they are a power over the legitimate governments on the continent.

I was Foreign Minister of Commander Chávez for six and a half years, and I participated in many meetings. On behalf of Commander Chávez, I proposed to

reform the Court and the Commission and we crashed against a wall.

The last OAS meeting I attended was in Cochabamba (Bolivia) in 2012, and there was a debate on it. It was not a public debate, but it was rough. It lasted seven hours and only the government of the United States opposed to a change in the IACHR. We proposed to have a reform adapted to the new times and to eliminate the impunity enjoyed by members of the Commission and the Court who thought they were above governments and countries. I also proposed to investigate the cases of abuse against Venezuela, in the case of the coup d'État, in the case of these terrorists, and the United States opposed it in Cochabamba.

Roberta Jacobson, I think she is still Assistant Secretary of State, was participating in that debate. I remember it because there was a long exchange of arguments. They presented their imperial arguments and we presented our anti-imperial arguments. Empire versus anti-empire. And a commission was created. I chaired the OAS at that moment.

We proposed to create a commission and it was created. What is the result of this commission after more than one year? No progress at all. On the contrary, the IACHR has just received Dr. Alan Brewer Carias, the person who wrote the decree of Pedro Carmona, as a hero. Do you believe we can tolerate so much abuse? No. We have to react, we have dignity, nobody stains Venezuela, and as long as we are here, we will not let anyone stain Venezuela, nobody messes with Venezuela.

It's enough! The IACHR ran out of time. And it is the best decision our Commander could have made. Now they refuse to recognize the Venezuelan electoral system.

Ramón José Medina, member of COPEI (party), went today to the IACHR headquarters to submit a document stating that Venezuela has a fraudulent electoral system, that there was fraud on April 14. They just submitted the document.

And I ask: What does the IACHR have to do with the sovereign and autonomous functioning of the fifth power of our country, the Electoral Power? They hope the IACHR makes a decision, I do not know when, and

say that I am not President of the Republic. What for? Maybe to justify an invasion, that's what they think.

One might think that they're stupid, but they do not do it because they're stupid, they do it because they are wicked, or they could be stupid and wicked at the same time. So, it is even a contradiction that they register as candidates, but then they submit a document saying that there is fraud here, that's their way of thinking.

The IACHR ran out of time. Venezuela submitted a document, a truly extraordinary document, very well argued. It took us about six months to work on it with experts in the field, with international assistance, and evaluate objectively the decision we were going to recommend to President Chávez, and this document contains everything. The document that we submitted at the OAS headquarters to denounce the IACHR, as established in its statutes, contains the truth of Venezuela. And immediately after some days, we were elected - as the Bolivarian Republic of Venezuela - for a permanent seat on the U.N. Human Rights Council in Geneva.

We will be there for three years. We will soon chair the U.N. Human Rights Council. We said we will streng-

then the Human Rights Council. In UNASUR, we are proposing to create a Human Rights Council as well as in the CELAC, so we can have a Human Rights Council in South America, in Latin America, not a gringo one, not in Washington, not with an international bureaucracy that hates us, that despises us and receives orders from the empire.

So, it is a wise and fair decision that also defends our nation from any attempt to stain us.

Remarks of the Supreme Commander

Hugo Chávez explaining the reasons
why Venezuela withdraws from the
Inter-American Human Rights Court (IAHRC)

The IACHR. We have made our denunciation. I won't make any more comments on that issue. I hope that someday we have a serious, true commission which, together with the governments and peoples, can fight for human rights. We strongly fight here for the human rights of our people.

The last thing the IACHR did has to do with a Venezuelan terrorist, a fugitive from justice called Díaz Peña. He planted some bombs here on the Consulates of Colombia and Spain. We proved that. It has been proven. He planted the bombs, we captured him and he was sent to jail. He served half of his sentence and received procedural benefits. A judge authorized it as part of the rights people enjoy here. Then, instead of reporting on a regular basis, he fled the country. And where is he right now? In the United States. Now he is denouncing the Venezuelan government - he, a terrorist - and claiming his rights were not respected here.

So the IACHR, without even consulting us, issued a... What was it, Nicolás?

Foreign Affairs Minister Nicolás Maduro: The Commission, without even consulting the Venezuelan state, immediately forwarded the case to the Inter-American Court, and the Inter-American Court ruled a few months ago that we have to pay him compensation amounting to some thousand dollars and protect the allegedly violated rights of this terrorist. He actually was undergoing trial; he was sentenced with other people who were at Plaza Altamira, and then they attacked these two diplomatic missions by planting the bombs.

President Chávez: We have a lot of arguments to justify our actions, our ethical principles and our moral behavior.

Caracas, September 7th 2012

President Chávez: See how the empire's bodies are, and how they act against Venezuela, like the ineffable IACHR, Inter-American Commission on Human Rights. We have already denounced it. We have to definitely withdraw from these organizations because they are imperial organizations.

The Inter-American Commission on Human Rights, what did it say Nicolás? Let's listen to our Foreign Affairs Minister and comrade Nicolás and see how cynical these organizations of the empire can be.

Foreign Affairs Minister Nicolás Maduro: A Secretary called our Embassy, our Deputy Ambassador Carmen Velásquez, and she told her about a statement they wanted to issue about an alleged massacre that took place in Venezuela.

Our Deputy Ambassador answered her that it did not happen and asked her to meet and wait to hold a conversation about it. She hung up the telephone and

the statement had already been published and they were describing it as a massacre against indigenous people.

So they are still violating the Inter-American Convention on Human Rights. They do not take the time to investigate. They start putting labels and join smear international campaigns against the country. They are the ones who most violate the Inter-American Convention and all the mechanisms used to review serious denunciations concerning human rights.

President Chávez: Now let's compare this situation: This ineffable commission does not have any proof and it is already demanding an investigation into the massacre from the Venezuelan government. They take it as a fact, and they have no proof. Now tell me, Nicolás, has that commission taken any stance against the massacre of Puente Llaguno.

Foreign Affairs Minister Nicolás Maduro: No, it never has. On the contrary Mr. President, when you were kidnapped, the only international organization that recognized the brief dictatorship of Pedro Carmo-
na Estanga was the IACHR through its Executive Secretary, Santiago Cantón, who sent an official statement

recognizing that government and ignoring your stature as President.

President Chávez: Thank you, Nicolás. These elements on which we have made remarks are part of what I have mentioned: what is at stake on October 7th.*

* He refers to the presidential elections held in Venezuela on October 7th, 2012, when President Chávez was reelected in a landslide victory against pro-US imperialism, right-wing candidate Henrique Capriles Radonski.

Letter sent by the Bolivarian Republic
of Venezuela to the Organization of American
States (OAS) to make official the country's
withdrawal from the Inter-American Human
Rights Court (IAHRC)

*Minister of Popular Power for Foreign Affairs of
The Bolivarian Republic of Venezuela
Caracas, September 6th, 2012*

*His Excellency Mr.
José Miguel Insulza
Secretary General
Organization of American States
Washington, D.C.*

Your Excellency,

I have the honor to refer to the American Convention on Human Rights (Pact of San José), signed in the city of San José, Costa Rica, on November 22, 1969 and ratified by the Republic of Venezuela, as it was known then, as well as to the two bodies governed by it: the Inter-American Commission of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, whose competence was recognized by the Republic of Venezuela, as it was known then, on August 9, 1977 and June 24, 1981, in accordance with Articles 45 and 62 of the American Convention on Human Rights, respectively.

For the countries of our region at the time it was very important to ratify the American Convention on Human Rights and institutionalize mechanisms that would establish a framework for the promotion and protection of human rights in the region. Our country was among the first to ratify the Pact of San José, as well as the only one to do so by unilateral declaration, and the second country to accept the Court's jurisdiction.

Subsequently, the Bolivarian Republic of Venezuela, since the promulgation of our Constitution in 1999, consecrated in even broader terms human rights and fundamental guarantees and freedoms which are enjoyed by all people living in this country, recognizing and legally enshrining the rights of indigenous communities, environmental rights and political, economic, social and cultural rights, establishing by our Constitution new institutions within the state structure, dedicated to protecting the rights, and ensuring compliance and unconditional respect for such rights.

Thus, the Venezuelan legal system is at the forefront of guarantee systems in the region, establishing new institutions that are intended to ensure full respect for

human rights and fundamental freedoms, such as the Ombudsman's Office and the Public Ministry, as well as the establishment of two new branches of Public Power: the Electoral Power and the Citizen's Power.

From the moral and political authority that this circumstance gives the Bolivarian Republic of Venezuela on human rights issues, it is coherent to report that in recent years the practice of bodies governed by the Pact of San José, both the Inter-American Human Rights Commission and the Inter-American Court of Human Rights, have moved away from the sacred principles that they are expected to protect, becoming an easily thrown political weapon aimed at undermining the stability of certain governments, especially that of our country, taking a course of action that interferes in the internal affairs of our government, violating and ignoring basic and essential principles widely recognized in international law, such as the principle of respect for state sovereignty and the principle of self-determination of peoples, even ignoring the content and provisions of the Inter-American Commission on Human Rights, particularly in matters relating to budgets that according to the Convention, would make legally advisable the action of the

Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, as it would be the required exhaustion of domestic remedies of the State party to the Convention, which suggests ignorance of the institutional and legal systems of each State party to this International Treaty, and therefore it is also another disrespect for the sovereignty thereof; denoting significant regression to the so called Inter-American Human Rights System, whose remedy should not be deferred.

The efforts of Member States of the Organization of American States to promote much needed reform and modification of both institutions have been to no avail, since they are hijacked by a small group of unscrupulous bureaucrats that have blocked, obstructed and prevented necessary changes.

By comparison, much progress has been made in the field of the Universal Promotion and Protection of Human Rights, which has been strengthened with the establishment of the Human Rights Council and structuring a valuable tool in the Universal System such as the Universal Periodic Review mechanism, which has allowed the discussion and analysis of the human rights situation

in all countries, on the basis of constructive dialogue on an equal footing, support, respect and justice.

The Bolivarian Republic of Venezuela remains committed to deepening the co-operation with the Human Rights Council as well as the committees that consider the reports of the various Conventions ratified by Venezuela, hoping that this system will be strengthened and become efficient and unbiased, to advance a genuine promotion and protection of all human rights, including the right to development.

This is why our country considered very unfortunate that the Inter-American Human Rights System does not follow the example of the Universal Promotion and Protection of Human Rights, regarding the need for a review and reform process required by competent bodies for the implementation and enforcement of the American Convention on Human Rights.

It is particularly regrettable that a system that was created to strengthen American solidarity in all matters regarding respect and guarantee of fundamental rights, as it was established in the Charter of the Organization of American States, today violates and infringes with

their malpractice the Pact of San José, and even undermines the rights and obligations of States parties which have been acquired within the framework of the UN Charter.

The Bolivarian Republic of Venezuela considers that it is pertinent to recall that the principle of universality of human rights, reflected in Article 131 of the OAS Charter, calls upon us to ensure that the Inter-American system does not prejudice the rights and obligations that we have acquired within the framework of the United Nations Universal System and therefore it is necessary to react.

Venezuela cannot remain silent about what today has become an exercise in gross and systematic violation of the Pact of San José by the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, as evidenced in cases that we express in detail in the annex to the present note.

The Inter-American Court cannot attempt to exclude, ignore, or replace the constitutional order of States Parties, since international protection derived from it contributes to or complements the protection provided

by the domestic law of the American states. However, repeated decisions of the Commission and the Court have hit the precepts and principles of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, as stated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of our State, in its Decision 1572 of 2008.

For its part the Commission, that in accordance with the Charter of the OAS has the power to promote the observance and defense of human rights and, by means of the Convention has jurisdiction to “hear and determine on matters relating to the implementation of commitments made by the States Parties” (Article 33), has no power whatsoever to attempt “implementation of the Convention” or to “declare” or “decide” on the responsibility of a State, or the legal consequences as it has attempted to do regarding the facts concerning Venezuela, clearly transgressing its own mandates and functions.

It is unacceptable that a country like Venezuela, which has given a historic leap to end the human rights violations that were systematic before 1999, is summoned and libeled for political reasons, through unfounded allegations,

devoid of probative substrate, from political sectors linked to breaches of the laws and the Constitution, which receive immediate attention and are accepted by the Commission and the Court even though, in all cases involving Venezuela, have recognized failure to exhaust domestic remedies and, in some cases, had not even been brought before them, in violation of Article 46.1 of the Convention.

The speed with which these clearly politicized and biased cases are dealt with against the Venezuelan government and its democracy, violating the Convention, have compelled our country to ask, both the Commission and the Court:

- What are the reasons that delayed for more than six years considerations on the most serious, massive and brutal violation of human rights in Venezuela, from the events of 27 and 28 February 1989, known internationally as “The Caracazo “, where hundreds of Venezuelans were killed?
- Why the American Commission did not issue statements or resolutions on the Cantaura massacres of 1982,

or Yumare’s in 1986, despite their extreme gravity, and did not express concern about this very serious bloodshed, but instead it has consistently expressed since 1999, over events which have no emergency characteristics such as bills of cooperation or information in Venezuela?

- Why our country to this date has not received an explanation about the recognition of fact made by the then Executive Secretary of the Commission, Santiago Canton, to the de facto authorities who settled in Venezuela as a result of the coup d’état of 11 April 2002?
- Why, even acknowledging that a de facto government had been installed, and the life of the kidnapped Constitutional President of the Bolivarian Republic of Venezuela was in danger, the Commission did not admit and did not process the request for precautionary measures submitted by MINGA Association in favor of our President?

These questions and many others, still unanswered, contrast with the fact that too many cases are already known against the Bolivarian Republic of Venezuela showing overstepping by the Commission and the Court and their action violates the Inter-American Convention

on Human Rights and the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, among which we would mention the following:

The cases of journalists Rios, Perozo et al against Venezuela, whose petitions were accepted by the Commission without the parties having exhausted remedies under domestic law, in violation of Article 46.1 of the American Convention on Human Rights, and later submitted to the Court, and even though the Court recognized that the alleged violation of the rights to freedom of expression, property and equality before the law was not true, accused the Venezuelan government of failing to ensure that particulars may not hinder the exercise of freedom of speech.

This irregular behavior of the Commission and the Court, and unreasonably in favor of Perozo and Rios -who on the date of the alleged events carried out a public political activity of significant belligerence against the government of President Hugo Chavez, invoking their journalist condition-, was in fact, from the mere admission of the cause, the underpinning of the international campaign to discredit the Bolivarian Republic of

Venezuela, accusing it of restricting freedom of expression. Additional details on these cases are included in the attached note.

Something similar happened in the case of Allan Brewer Carías against Venezuela, which was admitted by the Commission without the complainant having exhausted remedies under domestic law, in violation of Article 46.1 of the American Convention on Human Rights, and urging the Venezuelan State to “take measures to ensure the independence of the judiciary”, even though the criminal trial that he is subjected to, for the crime of conspiracy to violently change the Constitution has not been possible, since the defendant is a fugitive of justice and the Venezuelan criminal procedure legislation prevents trial in absentia.

This irregular behavior of the Commission unreasonably in favor of Brewer Carías, who participated in the authorship of the text of the decree dismissing public powers, which was proclaimed by the de facto authorities who stormed to power after the coup of April 11, 2002 in Venezuela, was in fact, from the mere admission of the cause, the underpinning of the international cam-

paign to discredit the Bolivarian Republic of Venezuela, accusing it of political persecution. Additional details on these cases are included in the attached note.

Another embarrassing example is the case of Leopoldo López against Venezuela, which was admitted by the Commission, not only without the complainant having exhausted remedies under domestic law, in violation of Article 46.1 of the American Convention on Human Rights, but despite the fact that the complainant would have expressly waived it by failing to challenge before the Supreme Court of Venezuela the administrative decision that disqualified him from holding public office for corruption. In this case the Court issues a judgment that was unenforceable, attempting to order the Venezuelan State to amend its domestic law, arising from the fulfillment of international obligations, including the inter-American obligation.

This irregular behavior of the Commission and the Court, unreasonably in favor of López, who carried out in his capacity as mayor repressive activities in support of the coup of April 11, 2002, and was also disqualified from holding public office for administrative corruption,

was in fact, from the mere admission of the cause underpinning an international smear campaign against the Bolivarian Republic of Venezuela, accusing it of political persecution. Additional details on these cases are included in the attached note.

Another example, particularly shocking, is the case of Uson Ramírez's complaint against Venezuela, in which the Court's judgment repeats the pattern of trying to stigmatize Venezuela for alleged restrictions on freedom of expression, through a judgment that, as documented by recordings of the deliberations of the judges, was agreed and decided without hearing the allegations, without hearing the parties concerned, or even the answers to the questions posed by the Court itself.

This unlawful conduct of the Commission and the Court, unreasonably in favor of Uson Ramírez, who carried out an insurrectionary call in the military field, produced in fact, from the mere admission of the cause, the underpinning of the international campaign to discredit the Bolivarian Republic of Venezuela, accusing it of restricting freedom of expression. Additional details on these cases are included in the attached note.

This inventory of grievances, that despite being extensive is not in the least exhaustive, would not be complete without special reference to the shameful case of terrorist Raul Diaz Peña against Venezuela.

This is about the latest and aberrant expression of the flagrant violation of the American Convention by their own institutions, both the Commission and the Court. A case was received by the Commission, admitting that remedies under Venezuelan law had not been exhausted, violating the provisions of Article 46.1 of the American Convention on Human Rights and that, nevertheless, it was referred to the Inter-American Human Rights Convention which, in the most shameless manner in judgment dated June 26, 2012 became aware of the merits of only one element, even though the preliminary recognized the non-exhaustion of remedies under domestic law: conditions of detention, followed by statement that the Venezuelan State is internationally responsible for the violation of the right to personal integrity and inhuman and degrading treatment of terrorist Peña, even if in the text of the judgment there was no evidence that could actually prove the situation

stated in that decision. Additional details about this case are included in the attached note.

Thus, a convicted criminal who attacked with bombs the diplomatic missions of Colombia and Spain on February 25, 2003, as part of a plan to destabilize Venezuela's democracy, was used by the Inter-American system as a fourth instance, to appeal the fair and firm decisions taken by the legal system of a sovereign country like Venezuela. The principle of legality is then reversed, and the criminal becomes the victim according to a peculiar political criterion, rather than a legal criterion of the current Inter-American system, an absurd and incongruous system that requires the Venezuelan State to adapt the conditions of detention of a criminal who, paradoxically, has fled and remains at large.

It is extraordinary besides being shameful that a system that was created to defend the highest values associated with human rights, indeed serves to shelter victimization brazen attempts of a criminal who has committed one of the meanest acts against human beings and the State, such as a terrorist act. As expressed by the Inter-American Court:

“(…) Tolerance of gross violations of procedural rules laid down in the Convention itself, would lead to the loss of authority and credibility which are essential in the bodies responsible for administering the system of protection of human rights.”

That is why, in order to protect the values and principles enshrined in the relevant conventions of the Universal Convention on Human Rights, and respect for the principles enshrined in our Constitution, our country is forced to distance itself from the current pervert exercise of the organs of the Inter-American System of Human Rights, composed of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. The principles relating to human rights must be preserved outside these flawed institutions that, with their practice, have delegitimized and altered the nature of their role as guarantors of the commitments made by the States in the Pact of San José.

So, the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela compels us to react to these abuses in the defense of human rights, the dignity of our people and

the democratic institutions, which have obviously been assaulted by decisions taken in recent years by the Commission and Court that violate the American Convention on Human Rights. And as a government that respects the legal system, we must reject all these decisions that protect criminals and crimes against society.

Since in accordance with the OAS Charter, the powers, structure and procedures of the Inter-American Commission on Human Rights are determined by the American Convention on Human Rights, the Bolivarian Republic of Venezuela issues the complaint of the American Convention on Human Rights, also ceasing the Declaration issued on August 9, 1977, at the time of ratification of said Convention.

On the basis of the above considerations, on behalf of my government, I wish to convey the sovereign decision of the Bolivarian Republic of Venezuela to denounce the American Convention on Human Rights, therefore, in accordance with the provisions of Article 78, would much appreciate if this note is considered as notice of termination, so that, from the time specified

therein, will cease its international impact, in matters it refers to, and the competence of its organs in our country, both the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.

The Bolivarian Republic of Venezuela will continue to comply with the elements contained in the OAS Charter and other instruments duly ratified by the Republic within the framework of this continental organization, particularly with all the clauses and provisions that do not contradict the spirit, purpose and reason of this complaint, sufficiently argued in this Note.

The Bolivarian Republic of Venezuela will continue to promote respect for the most sacred principles of international law, such as independence, noninterference in internal affairs, sovereignty and self-determination of peoples, as well as continue to respect and comply with the provisions of other mechanisms of integration and international cooperation, particularly those pertaining to the promotion and protection of human rights, and in particular the Protocol of Asunción on Commitments to the Promotion and Protection of Human Rights of MERCOSUR, signed on 19 June, 2005.

I wish to avail of this opportunity, Your Excellency, to express that the Bolivarian Republic of Venezuela will remain firmly committed, as it has been since 1999, with the promotion and protection of human rights and democracy, and the balanced realization of economic, social, cultural, civil and political rights, including the right to development, and I would express the firm willingness of our country to contribute to the construction of our American System of Human and Peoples Rights that in a truly independent and impartial manner would help to ensure human rights in the region without interfering tutelage, and with due respect for sovereignty, institutions and the legal system of States.


Nicolás Maduro Moros
Foreign Affairs Minister Nicolás Maduro

GROUNDS SUSTAINING THE DENUNCIATION
BY THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
OF THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS FILED BEFORE THE OAS GENERAL
SECRETARIAT

As to the facts and rights that assist our country in the sovereign decision of denouncing the American Convention on Human Rights, pursuant to the provisions of Article 78.

A. Concerning the facts related to the proceedings of the Commission

The Bolivarian Republic of Venezuela, from 2002, has been pointed by the Inter-American Commission for situations allegedly undermining human rights in our country.

In a systematic fashion during these years, Venezuela has indicated that the Commission has not acted with objectivity and transparency, violating the spirit of the Convention by sponsoring impunity, particularly of

those individuals involved in the events of April 2002 coup, as well as in the business and oil strike of December 2003. The international law has been manipulated to eliminate the faults of those who break our laws, and make them victims of unfounded false violations of their human rights.

During the last twelve years, the Bolivarian Republic of Venezuela has pointed out multiple cases that demonstrate the rupture with the nature and spirit with which the Commission and its proceedings were conceived, including the following:

1.- The bias and lack of precision in the study of the conditions that justify the inclusion of countries in Chapter IV of the Annual Report on the Human Rights Situation in the region. The current methodology used by the Commission does not provide criteria that allow analyzing the situation of human rights in the region in an objective and universal fashion. It admits vague denunciations which do not contain names, dates, places, and the exact relation of the facts, nor the probative means sustaining the allegations properly. Furthermore, the Commission establishes

the criteria justifying the inclusion of a State in the special analysis, but not the parameters that allow excluding a country from said chapter. Our country has maintained that the content of the annual report must be set as defined in paragraph a) of section one of Article 59 of the Regulations of the Commission itself, and in this sense, it must record “an analysis on the situation of human rights in the hemisphere, along with recommendations to States and organs of the OAS on the measures necessary to strengthen respect for human rights.”

2.- Interference in the sovereign legislative practice of the nation, by accepting and disclosing denunciations on hypothetical future and uncertain facts, such as the effects that the passing or not of certain laws may have, which is also an affront to the sovereignty of the Venezuelan State, in the exercise of functions and powers of the National Government. Two cases in particular are examples of this type of interventionist foreign pressure that Venezuela has received:

- The Commission issued a statement on December 3, 2010, in which substantive considerations were presented against the Bill for International Cooperation,

before it was passed by the National Assembly, which occurred ten days later, on December 13, 2010, when it adopted the name of “Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self-Determination”.

- Similarly, the Commission issued a statement on December 15, 2010, in which substantive considerations were presented against the enabling law before it was passed by the National Assembly, which occurred two days later, on December 17, 2010.

3.- Imprecision in the terms of precautionary measures and individual petitions.

With regard to these, there has been absence of an expressed and equitable rationale, in compliance with the provisions of the Rules and Regulations of the Commission for the establishment of precautionary measures, which shall include a concrete analysis in order to determine that the situation complies with the requirements of gravity, urgency and prevention of irreparable damages. In its reports on the establishment of Precautionary Measures, the Commission does not explain, with legal grounds, how a specific situation fits these requirements, but merely

states that “based on its criteria”, the circumstances are typical. Precautionary and Provisional Measures shall be characterized by revocability, accessoriness, extreme gravity and real urgency. Nevertheless, the Commission does not guarantee that such measures be subject to a periodical revision system that guarantees their essentially transitory nature.

4.- Deadlines for the procedures of the Commission. Revisiting the repertoire of petitions and precautionary measures considered by the Inter-American Commission, one can notice that there are no clear criteria that allow determining when a case is being delayed, be it for lack of information or for lack of interest by the petitioners, if indeed violations were committed under the American Declaration or the American Convention. Maintaining cases open, without the manifest interest of the victims is not the interest of any international system for the Protection of Human Rights, since unresolved open proceedings affect the perception of their conflict solving capabilities.

5.- The discretionary nature and laxity with which their mandates and regulations have been rein-

terpreted, acting even beyond Article 106 of the Chart of the OAS, attempting to play the role of implementers of the Convention by formulating “recommendations” that are clearly beyond the mandate of the Commission.

6.- The accessory negligence of Executive Secretary Santiago Canton and the recognition of the Commission to the coup d’état of April 11, 2002, and the de facto authorities of the regime resulting from the coup. A few hours after the Coup d’état that put paid to Democracy, stability, authorities and institutions of Venezuela, the Association for Alternative Social Policy —Colombian Minga— requested the Commission Precautionary Measures for the Constitutional President, Hugo Chavez Frias, given his abduction and confinement. On April 13, 2002, the Executive Secretary of the Commission, Santiago Canton, sent a letter to the Authorities that took part in the Coup, requesting “His Excellency” the Minister for Foreign Relations of the de facto government information concerning “Mr. Hugo Chavez Frias”, thus ignoring his investiture as Head of State of the Bolivarian Republic of Venezuela and legitimating the unconstitutional and de facto authorities resulting from the Coup d’état.

The Commission never granted precautionary measures in favor of President Hugo Chavez Frias during the abduction in which he was kept incommunicado on April 11, 12 and 13, risking death. No excuses were presented for the lack of due action with regard to a government resulting from a Coup. The Commission also failed to grant precautionary measures in favor of the then President of the Foreign Policy Commission of the National Assembly, Tarek William Saab, who was also abducted and assaulted before the television cameras, and for whom MINGA also requested urgent proceedings from IDEA.

7.- The inability to make the necessary reforms in a System that has been profoundly challenged by the vast majority of the OAS members. Failure to improve was evident during the 42^o period of sessions of the General Assembly of the Organization of American States, held last June in the city of Cochabamba, in the Plurinational State of Bolivia.

Given the avalanche of challenges, the Permanent Council of the OAS appointed a Special Working Group to Reflect on the Workings of the Inter- American Com-

mission on Human Rights (IACHR), which submitted its conclusions on January 25, 2012, by means of report CP/doc.4675/12, which were to be supported through a resolution that should be adopted in the aforementioned Assembly of the regional organ.

In said report the following recommendations for the IACHR were included:

- a. Rigorously apply the criteria for admissibility of petitions, including the exhaustive verification of the exhaustion of domestic remedies in order to avoid parallel procedures between national instances and the IACHR.
- b. Develop and widen the criteria for the filing of petitions and cases, including mainly those with long procedural inactivity.
- c. Implement deadlines (at least indicative) for each stage of the procedure.
- d. Define criteria or parameters and support and motivate the properness of the exceptional mechanism of accumulation of the admissibility and merits stages.

- e. Establish mechanisms to determine and individualize the alleged victims.
- f. Ensure prompt notification of initial requests to States, immediately after completion of the registration stage.
- g. An update on facts concerning initial petitions whenever they are communicated to States significantly later to their registration, or in cases of long procedural inactivity.
- h. Continue developing objective criteria in order to determine priorities as for the consideration of petitions and other cases, in virtue of the nature, complexity and impact of the alleged situations.
- i. Grant reasonable terms and extensions for States in order to communicate remarks, bearing in mind the age of the facts claimed in the petition, the volume of their background and/or the complexity of the matter.
- j. Grant reasonable terms and extensions for States in order to follow the recommendations given by the IACHR, in virtue of their nature, as well as

the scope of the actions required of the State, as appropriate, in accordance with the applicable regulations.

- k. Improve the mechanisms for access to files in electronic format of the petitions and cases for the involved States, petitioners and victims, with the purpose of fostering the prompt solution of said matters.
- l. Consider the development of an electronic mechanism tending to systematize records, reports and decisions by the IACHR.

These recommendations, although approved by the Permanent Council, could not be adopted due to the resistance of two Countries, the United States among them, stating that said recommendations were not mandatory for their States.

In the only Resolution adopted in Cochabamba to redeem the recommendations made by the Working Group, the United States, in its already common exercise of alleged supremacy and self-exclusion, introduced an ambiguous foot note, which was longer than the resolution itself, reiterating its position of not being linked to

the recommendations, demonstrating with its own attitude the absolute ineffectiveness of this biased Human Rights System, where the United States, with the greatest effrontery, carries out an exercise that should be subject to the strongest and most categorical rejection, since it makes it impossible to modify and correct the mistakes from malpractices by the organs of the system, impeding therefore to strengthen it, with the with the aggravating circumstance that the United States has not ratified the American Convention on Human Rights and therefore is not subject to its organs. It is a system, therefore, that has been kidnapped by the ill will of a few States that exercise their total control and dominance.

A. As to the cases presented by the Commission before the Court

Pursuant to Article 50 of the American Convention, the Commission is empowered to file the cases considered to have sufficient merits before the Inter-American Court, upon issuing the Merits Report.

This operational scheme between the Commission and the Court has allowed these two organs to act in

an articulated fashion against the Bolivarian Republic of Venezuela by means of the **admission of denunciations on cases that were being heard and processed by the legal instances of the country, or admitting denunciations that were never filed before said instances, in flagrant violation of Article 46.1 of the American Convention.**

Bellow we will detail some precise cases tainted for being inadmissible:

• **Cases of Ríos, Perozo et al. versus Venezuela**¹

On February 27, 2004, the Inter-American Commission admitted two cases filed by journalists of the TV channels RCTV (case of Luisiana Rios, dated July 23, 2002) and Globovision (case of Gabriela Perozo, dated June 22, 2003) for the aggressions of which they were allegedly victims.

1. Inter-American Court of Human Rights. Case of Rios et al. v. Venezuela. Judgment on preliminary objections, merits, reparations and costs. Judgment of 28 January, 2009. Series C 194. Inter-American Court of Human Rights. Case of Perozo et al. v. Venezuela. Judgment on preliminary objections, merits, reparations and costs. Judgment of 28 January 2009. Series 195.

These cases should never have been admitted because the complainants had not exhausted domestic remedies. With this admission, the Commission led to the unleashing of a media campaign to discredit the Venezuelan government.

The Inter-American Court ruled, on January 28 and March 3, 2009, respectively, determining that the Venezuelan State and the Government of President Chavez had not violated the rights to free expression, property and equality before the law of any of these television channels.

In the absence of evidence, the Court opted to stating that “the State failed in its obligation to guarantee that others (individuals) did not impede the television channels to exercise their right to freedom of expression and personal integrity”. These are typical cases unsubstantiated, either from the procedural or the merits stand point, built to constitute a false record against the Venezuelan government, demonstrating the blatant bias in favor of the complainant factors, which represent the right-wing opposition to the government.

• **Case of Allan Brewer Carías versus Venezuela**

On September 8, 2009, the Commission admitted the petition filed on January 24, 2007, by a group of lawyers, according to which the Venezuelan Courts were allegedly responsible for the “political persecution of Constitutional Lawyer Allan R. Brewer Carías within the framework of a legal procedure against him for the crime of conspiracy to violently change the Constitution, in the context of the **events that occurred** from April 11 to 13, 2002.”

It is noteworthy that the aforementioned Mr. Brewer Carías is trialed in Venezuela for his involvement in the coup of April 2002, being drafter of the decree by means of which a de facto president was installed, the National Constitution was abolished, the name of the Republic was changed, all State institutions were disavowed, and all members and representatives of the Branches of Government were removed, among others.

Admitting the petition, the IACHR urges the Venezuelan State to ‘take measures to ensure the independence of the judicial branch’, thereby prejudging that this independence did not exist.

On March 07, 2012, the Commission informed the Venezuelan government that the case would be submitted to the Court, even domestic remedies had not been exhausted. This example is more serious, because the criminal case against Allan Brewer has failed to be carried out in Venezuela, since under our criminal procedural law a trial cannot take place in the absence of the defendant, and it is the case that the defendant Brewer Carías fled the country, as it is publicly known, being a fugitive from justice up to date.

• **Case of Diaz Peña versus Venezuela²**

Mr. Raul Diaz Peña was indicted in Venezuela for his involvement in two terrorist attacks with explosive devices (bombs) against the Consulate General of the Republic of Colombia in Caracas and against the Embassy of the Kingdom of Spain in Caracas in 2003.

2. Inter-American Court of Human Rights. Ruling on the case of Peña versus Venezuela. Judgment on Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. June 26, 2012.

On April 29, 2008, he was sentenced to nine years and four months in prison “for the crimes of public intimidation, public property damage and minor injuries”. This terrorist managed to escape and traveled illegally to Miami, USA, in September 2010, being currently a fugitive from justice.

On October 12, 2005, **the Inter-American Commission on Human Rights** received a petition in favor of Mr. Raul Diaz Peña alleging the responsibility of the Venezuelan State in the violation of the rights to personal integrity, judicial guarantees and protection of honor and dignity. Subsequently, the petitioners added to the petition the allegations of violation of the rights to life, personal liberty, freedom of assembly, equality before the law and judicial protection.

The Bolivarian Republic of Venezuela, in a letter of May 3, 2007, submitted its observations on the petition, in which reference was made to the criminal proceedings against Mr. Diaz Peña rejecting all the terms set forth in the letter of petition and stating that the case did not meet the necessary requirements to be admitted by the Commission, inter alia, that it was a process that,

by then, was still open before the competent bodies of the State. In the writings of August 5 and 8, 2007, the Bolivarian Republic of Venezuela reiterated the preliminary objection of the Lack of Exhaustion of Domestic Remedies.

During the proceedings of the case, the Bolivarian Republic of Venezuela ratified that it did not meet the conditions of eligibility set forth in Article 46.1 of the American Convention on Human Rights³, which incorporates the principle of complementarity of the system of petition reception procedure.

The preamble of the American Convention recognizes “that the essential rights of the person are not de-

³ Article 46.1, in order for a petition to be admissible before the IA-CHR, the following requirements shall be met: a) the remedies offered by domestic law shall be exhausted, in accordance with generally recognized principles of international law; b) the petition must be lodged within a period of six months from the date on which the petitioner is notified of the final judgment exhausting domestic remedies. c) The subject of the petition or communication shall not be pending another international settlement procedure, and d) in the case of Article 44, the petition shall contain the name, nationality, occupation, address and signature of the person or the legal representative of the entity submitting the petition.

rived from being national of a certain state, but are based upon attributes of the human person, which is why international protection of conventional nature reinforcing or complementing the one offered by domestic law of the American States”.

In this sense, the Convention demands that for a petition to be admissible, it is necessary that all the effective and adequate remedies be exhausted in order to comply with the legal situation allegedly infringed.

The Inter-American Court of Human Rights has ruled that the Commission must conduct a proper examination of the circumstances of the case⁴, in order to determine the basis of the preliminary objection of non-exhaustion of domestic remedies.

Nevertheless, in its report on admissibility, dated March 20, 2009, the Commission decided to declare the complaint admissible in virtue of examination of articles 4, 5, 7, 8 11, 15, 24 and 25 of the American Convention.

4. Inter-American Court of Human Rights, Case of Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Ruling of June 26, 1987 (Preliminary Objections) and Inter-American Court of Human Rights, Case of Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Ruling of July 26, 1988 (Merits).

In the analysis on competence and inadmissibility carried out, the Inter-American Commission indicated that the petitioner had presented several recourses aiming at remedying the allegedly infringed situation, without clarifying how said recourses may have exhausted remedies offered by the internal jurisdiction.

In the remarks on the merits, the Bolivarian Republic of Venezuela reiterated the allegations of inadmissibility, since the defendant had at his disposal the remedy of appeal and even the remedy of constitutional revision; furthermore, the Venezuelan State pointed out to the Inter-American Commission that at the moment of filing the petition, the Venezuelan Courts were still hearing the case.

Despite this, the IACHR ordered to redress the violations of human rights allegedly committed, and on November 12, 2010, the IACHR submitted to the jurisdiction of the Court, in accordance with the provisions of articles 51 and 61 of the American Convention, case 12.703 versus the Bolivarian Republic of Venezuela.

On June 26, 2012, the **Inter-American Court of Human Rights** delivered its judgment on the Case of

Díaz Peña versus the Bolivarian Republic of Venezuela, after the State filed its brief on preliminary objections⁵ and reply to the written submission of the case and requests, arguments and evidence on May 24, 2011. In its defense, Venezuela rejected its international responsibility for the violation of the rights claimed by the Commission and by the representative, while asking the Court to dismiss the Report on Merits presented by the Inter-American Commission, since it was carried out based on a brief and partial examination exceeding its mandate, and based on the conditions for admissibility of the petition.

And here is the fact that denotes why this case becomes emblematic in showing the perverse and evil practice of the Commission and the Court: in considering the admissibility of this complaint, **the Court recognized that the domestic remedies had not been exhausted, since the Commission had made reference to applications submitted after the initial petition to the**

5. One of the two preliminary objections filed by the State was an allegation of “lack of impartiality” by some of the Judges and the Secretary of the Court.

Commission. The Court also noted that, when the initial petition was transferred to the State, on February 23, 2007, the ruling of May 11, 2007, which according to the Commission would have exhausted domestic remedies, had not been issued.

Despite determining that the case was inadmissible, the Court committed a new offense against the principles enshrined in the OAS Charter, against the Convention and against the Bolivarian Republic of Venezuela. Instead of declaring inadmissible the proceedings in their entirety, it proceeded to analyze the merits of a case that was, even for the Court, clearly inadmissible.

In the case of Peña, the Court and the Commission have evidently failed to comply with the rules and regulations that serve as a source, affecting blatantly the principles of subsidiarity and complementarity of the Inter-American system for the protection of the human rights provided for in the Preamble to the Convention.

The conventional rules and regulations concerning the preliminary objection of exhaustion of domestic remedies clearly understand the petition as a single docu-

ment, and refer repeatedly to the denunciation that contains it as a fundamental unit⁶. Therefore, proceeding to consider the merits of segments or partial sections of the denunciation, regardless of the non-compliance with the conditions of admissibility, is an accommodative and illegal interpretation of Article 46 of the Convention.

With regard to the statement in the Ruling concerning prison conditions and ill health of the terrorist, which were used to justify condemnation against the Bolivarian Republic of Venezuela, it is necessary to note that the same judgment admits that “it is a proven fact that, after the precautionary measures adopted, the material conditions of detention were progressively improving”⁷ and it is pointed out that the detainee subsequently received medical care⁸.

Despite these expressions denoting the evident lack of reasoning of the Ruling, the Court concludes by sen-

6 Cf. Article 46.1. In order for a petition or communication submitted in accordance with articles 44 or 45 to be admitted by the Commission, the following requirements shall be met (...) - artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión se requerirá (...)

7 Ruling on the case of Díaz Peña vs. Venezuela . Paragraph 94.

8 Cf. Paragraphs 100 to 107.

tencing the Bolivarian Republic of Venezuela⁹ to improve prison conditions for a terrorist who escaped from justice and did not serve his sentence.

This makes it intolerable for any democratic country that respects the rule of law to remain silent before a rights system which is obviously corrupt and acts outside of the principles and values that it is supposed to protect, and to the contrary, end up becoming accomplices and protectors of convicted terrorists.

• **Case of Uson Ramirez versus Venezuela**¹⁰

The cause of General (R) Francisco Uson Ramirez vs. Venezuela submitted to the consideration of the Inter-American Court of Human Rights by the IACHR on July 25, 2008, which ruled on the case on November 20, 2009.

9 Ruling on the case of Díaz Peña vs. Venezuela. Dissenting vote by Judge Eduardo Via Grossi.

10 Inter-American Court of Human Rights. Case of Uson Ramirez versus Venezuela. Preliminary objections, merits, reparations and costs. Ruling of November 20, 2009, Series C, No. 207.

The public hearing was held on April 01, 2009, in Santo Domingo, Dominican Republic, and Venezuela requested the digital recording of the hearing. The recording, which was submitted to Venezuela by the Court, included the audio of the public hearing, but also additional audio in which it can be noted that deliberations took place among the Judges of the Court on the following day, on April 2, concerning the sentence draft on the case and showing that they made a decision before hearing the allegations of Venezuela and without hearing the responses of the Parties to the questions posed by the Court itself during the oral hearing.

During that recorded deliberation, it is evidenced that the Judges arranged the content of the Sentence without hearing the allegations of the parties and acting in this cabal, they determined the criteria to condemn the Bolivarian Republic of Venezuela, agreeing between them to accept that an alleged violation to freedom of expression be included in the terms of the Sentence, despite the fact **that the rationale for the lawsuit is constituted by alleged violations related to the**

right to due process and to a fair trial, particularly concerning military justice¹¹.

The definitive ruling of the Inter-American Court condemned the Venezuelan State for violation of the principle of legality and the right to freedom of thought and expression, the right to a fair trial, the right to judicial protection and the right to personal liberty, as planned on April 2, 2009.

• Case of Apitz Barbera et al. versus Venezuela¹²

This case refers to three temporarily appointed judges of the First Court of Contentious-Administrative Matters, who, in the exercise their functions, made a *‘serious juridical mistake of inexcusable nature’* that led to their destitution by the competent judicial disciplinary organs.

¹¹ Recording of deliberations of the Judges of the Inter-American Court of Human Rights on the Case of Francisco Uson versus Venezuela.

¹² Inter-American Court of Human Rights, Case of Apitz Barbera et al. versus Venezuela. Preliminary Objections, merits, reparations and costs. Ruling of August 5, 2008. Series C, No. 182.

The Inter-American Court of Human Rights ruling of August 5, 2008, states that, with the destitution of the former judges of the First Court of Contentious-Administrative Matters, Ana Maria Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras and Juan Carlos Apitz B., the Venezuelan State violates their rights to due process, particularly, according to the Court: to be judged by an impartial court, to a simple, quick and effective remedy, and to be heard.

The Court ordered the Venezuelan State to modify national laws, to compensate the former judges on account of pecuniary and non-pecuniary damages and their reinstatement in the judiciary branch.

The Inter-American Court of Human Rights, in the verification of the alleged violation of the rights or freedoms protected by the Convention, tried to dictate mandatory rules upon the Government and the administration of the Judicial Branch, which are exclusive competence of the Supreme Court of Justice, attempting to even establish guidelines for the Legislative Branch concerning matters of judicial career and responsibilities of judges, thus violating the sovereignty of the Venezuelan

State in the organization of the branches of government and the selection of its officials, which is inadmissible.

This ruling of the Inter-American Court of Human Rights constitutes an offence against the provisions of the preamble to the American Convention, inasmuch as it violates and misinterprets the principle of complementarity of the Inter-American Human Rights Protection System, by attempting to rule, as a domestic court would, with regard to provisions of domestic law.

The Inter-American Court, overstepping its boundaries, even committed imprecision related to the denominations of Venezuelan domestic law, which constitutes a demonstration of the reproachable practice of the Court and the Commission in pretending to construe provisions that belong exclusively to the jurisdiction of national courts, facilitating that some transgressors of our legislation have started to use that international jurisdiction as a “fourth judicial instance.”

Indeed, paragraph 147 of the Inter-American Court of Human Rights ruling of August 5, 2008, provides that the omission of the National Assembly to dictate the Venezuelan Judge’s Ethics Code, “*has had an impact*

on this case, since the victims were judged by an exceptional Organ without defined stability and whose members may be appointed or removed without previously established procedures and to the sole discretion of the Venezuelan Supreme Court of Justice". Amazingly, this very same paragraph states the inability to prove that the Judicial Emergency and Restructuring Commission has committed misuse of power, or that it was directly pressured by the National Executive Branch to destitute the aforementioned former judges, and then it concludes in paragraph 6 of Chapter X that "it has not been established that the Judicial Branch as a whole lacks independence."

It is evident that the Inter-American Court, by not limiting itself to ordering compensation, used the ruling to unacceptably intervene in matters of the State by ordering the reinstatement of judges that the national juridical system considers as being legitimately removed from their positions.

The Inter-American Court of Human Rights has issued sentences affecting principles and values of Constitutional and Conventional order, affecting also the justice system and seeking not only to ensure the human rights of allegedly aggrieved parties, but also to undermine the

sovereign autonomy of the Organs of the Bolivarian Republic of Venezuela.

The Constitutional Division of the Supreme Court of Justice of the Bolivarian Republic of Venezuela declared, on December 18, 2008, that the Court's decision was UNENFORCEABLE.

• **Case of Leopoldo Lopez versus Venezuela**¹³

It is the case that Mr. Leopoldo Lopez was subject to sanctions by the Comptroller General of the Bolivarian Republic of Venezuela within the framework of two administrative processes:

1. The first investigation to which Mr. Lopez Mendoza was subject was related to events that occurred while he occupied a position in the company Petroleos de Venezuela SA. Being then employee of the state company PDVSA, the non-governmental organization "Primero Justicia" (of which Mr. Lopez was a member) received

¹³ Inter-American Court of Human Rights. Case of Lopez Mendoza versus Venezuela. Ruling on Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Ruling of September 1, 2011. Series C, No. 233.

a substantial donation through his mother, Antonieta Mendoza Lopez, who then held the position of Public Affairs Manager of the Services Division of PDVSA Oil and Gas S.A. The Comptroller General's Office of the Bolivarian Republic of Venezuela determined that said donation contravened the rules on conflict of interest since "there is a conflict of interest between PDVSA and an employee or group of employees, when a decision, act or agreement of the Company, the worker or workers who take part or influence the decision, act or contract personally benefit or favor their immediate relatives (...)".

2. The second investigation was circumscribed to facts related to his proceedings as Mayor, position that he held from 2000 to 2004.

In November 2008, Leopoldo López was sanctioned with disqualification from holding public office by the Comptroller General's Office of the Bolivarian Republic of Venezuela, for violations of norms that constitute acts of administrative corruption.

Case No. 12668 of Leopoldo López Mendoza was originated by means of petition received by the Commission on March 4, 2008, and filed under No. 275-08. On

July 25, 2008, the Commission issued the Admissibility Report No. 67/08. On August 08, 2009, the Commission adopted the Merits Report No. 92/09 and communicated it to the Bolivarian Republic of Venezuela. On December 14, 2009, the Inter-American Commission on Human Rights filed a lawsuit against the Bolivarian Republic of Venezuela with regard to this case.

The Commission and the representatives of Mr. Lopez Mendoza requested the Court to declare the Venezuelan State responsible for violation of the political rights, fair trial, judicial protection, along with the obligation of Respecting the rights and having to adopt provisions of domestic law, with respect to Mr. Lopez. Furthermore, the Commission requested the Court to order the State to adopt measures of reparation as well as the payment of costs and expenses.

It is worth noting that, on September 26, 2005, the Comptroller General issued a resolution¹⁴ by means of which, considering the gravity of the irregularities committed and sanctioned with administrative accountability, as well as the procedure set forth in the Organic Law of the Comptroller General's Office of the Republic, a

sanction of disqualification from holding public office was issued, indicating that the “the gravity of the irregularity committed, sanctioned with the declaration of administrative accountability dated November 2, 2004 [which became final on March 28, 2005], as well as the recurrence of a misconduct subject to sanction in the aforementioned terms¹⁴, it was decided to “sanction [Mr.] LOPEZ MENDOZA, [...], with disqualification from holding public office for a period of six (6) years”¹⁵.

14 Cf. resolution 01-00-235 of September 26, 2005 issued by the Comptroller General of the Republic.

15 Resolution 01-00-235 of September 26, 2005 issued by Comptroller General of the Republic. On October 27, 2005, Mr. Lopez Mendoza was notified of the resolution. By means of the corresponding official letter he was informed that “he could file a reconsideration remedy against said decision before the [...] Comptroller [...], within fifteen (15) working days from the date of notification, in accordance with the provisions of Article 94 of the Organic Law of Administrative Procedures”. Additionally, it was indicated that “he could file the corresponding appeal for annulment [...] before the Supreme Court of Justice, within six (6) months from the date of [...] notification, in accordance with what is set forth in paragraph 20 of Article 21 of the Organic Law of the Supreme Court of Justice”. Official Letter No. 08-01-1074 dated September 27, 2005, by the Directorate for Determination of Accountability.

The Court Considers that the provisions of domestic law violated the right to be elected, the obligation to duly state reasons, the right to judicial protection and the obligation of adjusting domestic law to the American Convention.

Mr. Lopez Mendoza did not exhaust domestic remedies before turning to the Inter-American human rights protection system, since the resolution by means of which the Comptroller General established the sanction of disqualification becomes final as it was not appealed before the Political-Administrative Division of the Supreme Court of Justice. The petition of Mr. Leopoldo López before the Inter-American system must have been declared inadmissible with the purpose of safeguarding the complementarity of the system in accordance with Article 46 of the American Convention on Human Rights.

The court did not consider that the Bolivarian Republic of Venezuela has subscribed and ratified other conventions and treaties, assuming obligations such as by means of the Inter-American Convention against Corruption of 1996, which obliges American States to

“take the adequate measures against people who commit acts of corruption in the exercise of public functions or specifically linked to said exercise”, without requiring that such measures be necessarily jurisdictional. In fact, the Inter-American Convention against Corruption urges States to promote and strengthen the necessary “mechanisms” (not exclusively judicial) in order to punish acts of corruption in the exercise of public functions”.

Similarly, Venezuela is a signatory country of the “United Nations Convention against Corruption”, signed in 2003, aimed at introducing a set of standards and measures that can be implemented by all countries to strengthen their legal systems for fighting corruption. It is worth noting that the protection of the sovereignty of the States is expressly stated in Article 4 of the treaty:

“1. The States Parties shall fulfill their obligations under this Convention in accordance with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of nonintervention in the internal affairs of other States. 2. Nothing in this Convention entitles a State Party to exercise, in the territory of another state, jurisdiction or functions that the law of that State reserves exclusively for its authorities”.

The Inter-American Court of Human Rights again interpreted in an accommodative fashion the objectives of the American Convention, by challenging the role and powers of the Branches of the Venezuelan Government, assuming in biased way the arguments manipulated by the right-wing opposition, consequently exceeding its functions.

C. As to the Constitutional Right that assists the Bolivarian Republic of Venezuela

Article 7 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela provides that **“the Constitution is the supreme and fundamental norm of the legal framework”**, thus every person and organ in the exercise of Public Authority are subject to it.

Under the establishment imposed by the **“Principle of Constitutional Supremacy”** set forth in the aforementioned **Article 7** of the **Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela**, it cannot but be noted that it is our Constitution, which defines the assumption that “...international relations of the Republic serve the purposes of the State based upon *the exer-*

cise of sovereignty and the people's interests” and that for the purpose of developing such a proclamation, international relations are framed in the principles of interdependence, **equality among States, self-determination and nonintervention in internal affairs, peaceful resolution of international conflicts, cooperation, respect for human rights and solidarity among peoples in the struggle for their emancipation and the welfare of mankind**, which are proclamations consecrated in **Article 152** of our **Constitution**, whose final part provides that the Republic is urged to maintain “...*the most firm and resolute defense of these principles and the democratic practice in all international organizations and institutions”*.”

The Bolivarian Republic of Venezuela, historically and ancestrally, is a profound lover of peace, and profuse guarantor of human rights, to the point of recognizing them **as one of the guiding principles of the Venezuelan State**, by establishing in **Article 2** that Venezuela “...constitutes itself in a democratic and social State of Law and Justice, which holds as superior values

of its legal order...”, among others, that of **the preeminence of human rights**.

Therefore, our glorious country has placed itself in the vanguard of the Inter-American System by adopting, other than the aforementioned postulates and **with constitutional character**, other core and cardinal principles of human rights protection, inasmuch as: a) It establishes that the State shall guarantee to every individual no renounceable, indivisible and interdependent enjoyment and exercise of human rights, **in accordance with the principle of progression and without discriminations of any kind** (v.g. **Article 19** of the Bolivarian Republic of Venezuela); b) It establishes the **principle of the non-exhaustive and enuntiative nature of human rights set forth in the Constitution and the international instruments, with respect to other rights that are not expressly enunciated in said texts** (v.g. **Article 22** of the aforementioned Constitutional text); and, c) It establishes the principle of “*Non-Applicability of Statutory Limitations on the proceedings to sanction crimes against humanity and serious violations of human rights and war crimes”* (v.g. **Article 29**;

eiusdem), only to mention some Constitutional provisions demonstrating the profound respect that the Venezuelan State and its democratic institutions guarantee for the effectiveness and fulfillment of such principles.

Similarly, within the context of the aforementioned Constitutional postulates, in accordance with Article 23 of the Constitution, it is consecrated that Treaties, Pacts and Conventions concerning human rights signed and ratified by Venezuela have Constitutional rank and prevail within the domestic legal system, in so far as they contain norms on their enjoyment and exercise that are more favorable than the ones provided for in the Constitution and the laws of the Republic, and they shall be immediately and directly enforced by Courts and other organs of the government.

Nevertheless, the scope of the aforesaid constitutional provision has been construed by the Supreme Court of Justice by means of a binding ruling issued by its Constitutional Division, through Ruling No. 1572/2008, related to the judgment of the Inter-American Court dated August 5, 2008, in which it was ruled that “Article 23 of the Constitution does not grant international treaties on

human rights with **“supraconstitutional” rank**, therefore, in case of antinomy or contradiction between a provision of the Constitution and a rule of an international treaty, the Judicial Branch shall determine which one is applicable, considering both the provisions of the aforesaid rule and the Jurisprudence of the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice, in accordance with the content of articles 7, 266.6, 334, 335, 336.11 of the Constitution and ruling No. 1077/2000 of the Constitutional Division.

Likewise, the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice in its ruling No. 1942/2003 specified the following with respect to Article 23 of the Constitution:

According to this Division, two key elements derive from Article 23: 1) It is related to human rights applicable to individuals; 2) It refers to rules establishing rights, not rulings or judgments of institutions, resolutions of organs, etc., prescribed in Treaties, but only rules establishing human rights.

The Constitutional Division reiterates that it concerns the prevalence of the rules contained in Treaties, Pacts and Conventions (terms that are synonyms) related to human rights, but not reports or opinions of international organs that attempt to construe the scope of the norms of international instruments, since Article 23 of the Constitution is clear: the constitutional Rank of Treaties, Pacts and

Conventions refers to their rules and regulations, which, by being integrated to the Constitution in force, can only be interpreted, within the framework of Venezuelan Law, by the Constitutional Judge, in accordance with Article 335 of the current Constitution, especially with the ex officio interpreter of the Constitution of 1999, which is the Constitutional Division, and so be it declared (...).

It is thus the Constitutional Division the one in charge of determining what norms on human rights of said treaties, pacts and conventions prevail in the domestic legal system (...).

This jurisdiction of the Constitutional Division on the matter, which emanates from the Constitution, shall not be diminished by norms of adjective character contained in Treaties or other International texts on Human Rights signed by the country, that allow the States Parties of the Treaty to consult international organs on the interpretation of the rights referred to in the aforesaid Convention or Pact, as it is established in Article 64 of the Law approving the American Convention on Human Rights, Pact of San Jose, since, if that were possible, it would be a form of constitutional amendment on this matter, without compliance with the corresponding requirements for this purpose, diminishing the competence of the Constitutional Division and transferring it to multinational or transnational (international) entities that would carry out binding construes (...).

The decisions made by these organs shall be complied with in the country, in accordance with the provisions of the Constitution and the laws, provided that they do not oppose what is set forth in Article 7 of the current Constitution, which reads as follows: The Constitution is the supreme law and the foundation of the legal order.

All individuals and organs exercising Public Power are subject to this Constitution as long as they meet the organic competences set forth in Conventions and Treaties. For this reason, despite the respect of the Judicial Branch for the rulings and judgments of said organs, they cannot violate the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela or infringe the regulations of Treaties and Conventions governing these protections or other decisions.

Should an international organ, legally accepted by the Republic, shelter someone in violation of human rights of groups or individuals within the country, such decision shall be rejected although it emanates from international bodies protecting human rights (...).

This Division considers that, and for the purposes of Article 7, of the Constitution, there is no jurisdictional organ above the Supreme Court of Justice, unless the Constitution or the law indicates so, and even in this case, a decision contradicting the Venezuelan constitutional provisions shall not be applicable in the country and so it is declared (...).

Articles 73 y 153 of the Constitution contemplate the possibility of transferring Venezuelan competences to supranational organs, allowing them to encroach into national sovereignty:

*But the Constitution itself points out the areas where this might occur, such as –for example– Latin American and Caribbean Integration (article 153 **eiusdem**). Areas different from Human Rights **per se**, and where rulings dictated are to be immediately applied in the territory of member states, as provided for by Article 91 of the Law approving the Statute of the Court of Justice of the Andean Community.*

*This Division understands that, beyond these explicit areas, the national sovereignty cannot suffer any distension whatsoever by mandate of Article I of the Constitution, which establishes as inalienable rights of the Nation the following: independence, freedom, territorial integrity, immunity and national self-determination. Said constitutional rights are **inalienable**, are not subject to be relaxed, unless the Constitution itself provides it, along with the mechanisms that make this possible, such as the ones contemplated in Articles 73 and 336.5 of the Constitution, for example.*

As consequence of the above, in principle, the execution of rulings of Supranational Courts shall not undermine the sovereignty of the country or the fundamental rights of the Republic” (highlighted in the original ruling).

The position of the Bolivarian Republic of Venezuela promoted by means of this document, far from placing our State on the margins of the international community, as it is pretended through a systematic campaign aiming at disturbing our resolute convictions, seeks to raise, by making our Constitution known, the flag upon which the foundations of our State are laid, for our State profoundly loves Human Rights, and to raise awareness on all the proceedings that allow ensuring the essential end and purposes set forth in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, trying to avoid

elements that may disturb the sound peace of the Republic and the glorious people of Venezuela, in the light of a methodical and systematic campaign in avalanche that seeks to tarnish the image, the interests and dignity of the Nation of Bolívar.

Similarly, our commitment and loyalty to the depositary of sovereignty, which resides in the people in an untransferrable fashion, in accordance with **Article 5** of the **Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela**, upon which we shall guarantee the principles of **independence, equality between States, self-determination, pacific resolution of international conflicts, respect for human rights and solidarity between the peoples in the struggle for their emancipation and the welfare of human kind, as stated before**, obliging us to maintain from all sectors of Public Power the most firm and resolute defense of these principles and their practice in all international organs and institutions, framed in the impregnated notion of sovereignty, in response to which the Republic is to maintain international relations with the peoples of the world.

In virtue of all the above, and in light of the fact that **repeated decisions of the Inter-American Court of Human Rights collide with the precepts and principles of our Constitution and even with the American Convention on Human Rights itself, this is the reason for the Bolivarian Republic of Venezuela to consider that it is important to terminate the incompatibility between our domestic legislation and our sovereign rights, taking distance from the wicked exercise of the Competent Organs of the Inter-American System of Human Rights, constituted by the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.**

Therefore, our country, on this date, has proceeded to notify the General Secretariat of the Organization of American States about the Denunciation of the American Convention on Human Rights, in accordance with the provisions set forth in Article 78.

Este libro se terminó de imprimir
en septiembre de 2013,
en los talleres gráficos del Servicio
Autónomo Imprenta Nacional,
La Hoyada, Caracas. República
Bolivariana de Venezuela.

El tiraje fue de 1.000 ejemplares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, es un claro ejemplo de injerencia imperial por parte de EEUU. Así lo han denunciado varios gobiernos latinoamericanos y, recientemente, el Gobierno Bolivariano, cuya renuncia a la CIDH se introdujo ante la OEA el 6 de septiembre de 2012. Un año después, se hizo efectiva la desincorporación por voluntad propia y digna de Venezuela a este organismo que se ha degenerado, cuyas sentencias viciadas contra nuestra república obedecen a intereses del Pentágono y de sus lacayos locales.

